

***“Sólo triunfa en el mundo, quien se levanta y busca a las circunstancias, o las crea, si no las encuentra”. George Bernard Shaw.***

***“Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”. Madre Teresa de Calcuta.***

***“El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos”.  
Michael Jordan.***

*No se permite la reproducción total o parcial de esta libro. ni su incorporación a ningun sistema informatico , ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio,electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación o otros métodos , sin el permiso previo del editor*

*Propiedad : Instituto de Economía y Negocios S.L 2014*

*Consistorio 4 La Laguna*

*Autor : Manuel Delgado González 2014*

*Primera edición febrero 2014*

*Impreso en España*

Para dejar atrás la crisis es necesario abordar, a corto y a medio plazo, numerosos retos que exigen cambios de gran calado en las empresas, en la educación y en el sector público. Solo de ese modo mejorará la competitividad del tejido productivo y la eficiencia de las instituciones y empresas, ayudando a crecer más y mejor, y a reducir los riesgos de exclusión laboral y social existentes. Existe una mayor confianza en la economía española que se traduce en indicadores puntuales, pero que puede desviar la atención de un diagnóstico en perspectiva de los problemas estructurales que han marcado el perfil distintivo de la crisis española respecto a las de otros países.

La confianza externa que en los últimos meses ha ganado la economía española encuentra dificultades para trasladarse al interior debido a la gravedad de los problemas pendientes de resolver en ámbitos clave para la mayor parte de la población y de las empresas: el desempleo, la escasez de crédito, el bajo nivel de utilización de la capacidad productiva, el todavía elevado nivel de endeudamiento

y los desequilibrios presupuestarios. La solución de estos problemas marcará el paso de la salida de la recesión a la superación de la crisis. Todos insisten en la necesidad de un crecimiento incluyente, y advierten que si no se actúa frente al desempleo masivo y continuado y el riesgo de pobreza, la recuperación no se consolidará. Pero la cuestión es si somos conscientes de las verdaderas víctimas de la crisis que están en situación de pobreza extrema. España necesita abordar numerosos cambios a medio plazo, tanto en el sector público como en el privado, tanto en los marcos normativos como en su cultura económica y en los comportamientos sociales. Merece la pena, pese al esfuerzo que ello requiere y las resistencias que hay que vencer, sobre todo si se tienen en cuenta a las generaciones con más futuro por delante.

Paradójicamente, las dificultades actuales inclinan a mucha más gente a aceptar la necesidad de cambios que cuando las cosas iban bien y, aunque los problemas de competitividad ya estaban presentes, el crecimiento era intenso y disimulaba los problemas estructurales

Ahora la recuperación del crecimiento de la renta y el empleo preocupa mucho y se está más dispuesto a buscar palancas para impulsarlo a través de las reformas.

La crisis ayuda a comprender y aceptar que la importante modernización de nuestro país durante el último medio siglo resulta insuficiente como base de una nueva etapa de progreso.

El oscuro horizonte de los últimos años obliga a reconocer que el crecimiento español no podrá ser ni vigoroso ni duradero sin una adaptación exigente al incesante cambio tecnológico, al nuevo escenario competitivo mundial y al avance del papel económico y social del conocimiento. Las responsabilidades de los gobiernos necesitan financiación adecuada y el sistema fiscal español presenta una paradójica combinación de altos tipos impositivos y baja presión fiscal efectiva que genera amplias dudas sobre su transparencia, capacidad recaudatoria, distribución de la carga y eficiencia. Es necesario aumentar los recursos de la administración tributaria, en especial los que permiten adaptarla a los cambios tecnológicos necesarios

para hacer un seguimiento eficaz de las bases imponibles y luchar contra el fraude, un asunto en el que la sociedad quisiera percibir mayor esfuerzo y mejores resultados

Una estrategia de desarrollo ambiciosa y equilibrada España necesita abordar numerosos cambios a medio plazo, tanto en el sector público como en el privado, tanto en los marcos normativos como en su cultura económica y en los comportamientos sociales.

Merece la pena, pese al esfuerzo que ello requiere y las resistencias que hay que vencer, sobre todo si se tienen en cuenta a las generaciones con más futuro por delante.

Paradójicamente, las dificultades actuales inclinan a mucha más gente a aceptar la necesidad de cambios que cuando las cosas iban bien y, aunque los problemas de competitividad ya estaban presentes, el crecimiento era intenso y disimulaba los problemas. La crisis ayuda a comprender y aceptar que la importante modernización de nuestro país durante el último medio siglo resulta insuficiente como base de una nueva etapa de progreso

El oscuro horizonte de los últimos años obliga a reconocer que el crecimiento español no podrá ser ni vigoroso ni duradero sin una adaptación exigente al incesante cambio tecnológico, al nuevo escenario competitivo mundial y al avance del papel económico y social del conocimiento. Las resistencias a asumir esa necesidad de cambios desde finales del siglo XX fueron muy perjudiciales, pues generaron mayores desequilibrios financieros y desembocaron en un largo estancamiento que deterioró la confianza externa e interna. En los últimos meses, el cambio de rumbo ha permitido que las perspectivas sobre España mejoren en el exterior. Sin embargo, la profunda recesión y las graves dificultades padecidas por los grupos sociales más golpeados por la crisis han impedido que, por ahora, cale en el interior esa perspectiva de mejora. Mientras el empleo no crezca será difícil que el consumo y la demanda interna vuelvan a despegar y la confianza se recupere. Por eso es tan importante que, como mínimo, se vayan confirmando las expectativas actuales de recuperación

Para lograr una recuperación duradera y un horizonte colectivo despejado hacen falta, no obstante, más elementos: el progreso a medio plazo de nuestra sociedad exige perfilar y desplegar una estrategia de desarrollo compleja e inteligente, apoyada en una visión amplia y equilibrada de los problemas y los objetivos

Una parte importante de la economía española no ha hecho suficientes esfuerzos de adaptación al mismo, es menos productiva y más rígida de lo que requiere un mundo tan cambiante

Las debilidades y desajustes tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones educativas, el tipo de formación recibida y las habilidades y competencias adquiridas en ellas, las decisiones de los jóvenes y las familias sobre los años de estudios cursados.

Pero también están relacionados con la capacidad de emprender de las sociedad española, en particular de los jóvenes españoles más cualificados, y con la preparación de los emprendedores para crear y dirigir empresas en el escenario competitivo actual .



## **España uno de los países con más corrupción de La Unión Europea**

La Comisión Europea pide “proseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación efectiva de las nuevas normas sobre la financiación de los partidos políticos” así como “reforzar los mecanismos de control” sobre las administraciones autonómicas, provinciales y locales, donde se producen la mayor parte de estos escándalos .

### **La lucha contra la corrupción es un capítulo indispensable para mejorar en nuestro proyecto social.**

Pues algunos de los principales brotes de corrupción se encuentran en la financiación de los partidos políticos, que tradicionalmente han estado muy expuestos a préstamos bancarios y es una cuestión que debe legislarse con criterios objetivos para que la sociedad en su conjunto pueda volver a creer en la clase política y considerar que los partidos políticos son honestos en su financiación y mejorar la supervisión de los préstamos, mejorar los controles financieros internos y reforzar el régimen de sanciones

La gran mayoría de los españoles el (81,8%) considera que la situación política es “mala” o “muy mala”. Y la preocupación ciudadana por la corrupción sigue aumentando y se mantiene como el segundo problema para los españoles tras el paro, los políticos, esperan que con la mejora de la economía el malestar social disminuirá y las cosas les irán mejor a partir de ahora, políticamente hablando.

### **Pero la realidad puede sorprender a todos**

¿Es posible que la fractura social que no había surgido durante los peores momentos que hemos vivido se manifieste ahora cuando la economía da señales de mejora?

Parece contradictorio, porque el razonamiento intuitivo lleva a pensar que una vez que la economía mejora, los ciudadanos se sienten más aliviados y el conflicto social latente disminuye o desaparece. Pero quizás no sea suficiente, es necesario incrementar notablemente la sensación de que esta recuperación también puede llegar al conjunto de la sociedad

Por ello, el Gobierno debe saber explicar claramente los componentes, sin ocultar ninguno, que inciden en la mejora del desempleo. Con sus manifestaciones quiere hacernos ver que desempleo mejora debido a su reforma laboral y no es verdad.

El Gobierno debe dar un claro ejemplo de transparencia, veracidad e información ante el drama del desempleo a la ciudadanía

Y es que la libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas sino un derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a estar bien informados olvidar la cara oculta del paro, es decir, el rostro humano de las situaciones a las que afecta ya que el problema real grave surge cuando las prestaciones por desempleo que habitualmente empiezan cubriendo un 70% de los ingresos perdidos se terminan.

**En España el 40% de los desempleados no percibe ningún tipo de prestación económica.**

Y cuando esto sucede el desempleo se arrastra, las finanzas familiares se derrumban, el ahorro familiar se agota, no se pueden pagar las facturas más básicas, la vivienda se pierde...En definitiva, se genera angustia económica social y familiar y personal. La felicidad, es en buena medida, la sensación de tener la propia vida bajo control.

La indignación moral con esta falta de equidad puede provocar la aparición de la crisis social. El discurso político sobre el final de la crisis puede ser percibido como ofensivo y hasta provocador para aquellos ciudadanos que, después de cinco años de sacrificios, no les queda ya nada y que muchos de ellos han perdido la esperanza. Es posible, entonces, que aquellos que soportaron con una cierta calma una mala gestión de la crisis económica no toleren ahora una mala gestión de la recuperación. Si es así, es muy probable que a la crisis económica le siga la crisis social. La razón es que la tolerancia social a la desigualdad cambia a lo largo del transcurso de una crisis. Esa tolerancia es elevada cuando las cosas están mal para todos. Pero puede cambiar de forma brusca cuando una parte de la población percibe que el vaso de la recuperación no rebosa y ellos no se benefician. El leve crecimiento económico no es suficiente para absorber los parados y la afiliación a la Seguridad Social continúa descendiendo, lo que pone en riesgo el sistema. Los españoles espera que esas señales se confirmen para

confiar en que la recuperación está próxima. Más allá de los deseos, la realidad presenta un panorama complejo en el que los problemas siguen siendo graves y las perspectivas de crecimiento modestas. Ciertamente, se aprecian avances en la corrección de algunos desequilibrios, pero también dificultades para encarrilar otros, y una preocupante desatención a temas muy relevantes para nuestro desarrollo futuro. Así pues, está justificado un optimismo moderado cuando se tiene en cuenta que en estos últimos meses se han suavizado las tensiones que nos mantuvieron al borde del precipicio financiero durante buena parte del año pasado: la sensación de caída libre se ha frenado. Al mismo tiempo, existen argumentos de peso para seguir muy preocupados por la dimensión de las dificultades que la economía todavía deberá superar para ofrecer a los españoles resultados nítidamente positivos.

Nos encontramos en un momento en el que la tarea consiste en ir dando pasos para inclinar paulatinamente la balanza desde el lado de los problemas hacia el de las soluciones

Para avanzar en esa dirección es preciso definir horizontes de futuro y trazar itinerarios para aproximarse a ellos, partiendo de diagnósticos realistas que identifiquen las causas de los problemas, su alcance, los obstáculos que se oponen a su superación y las vías de salida. Esta tarea no es solo de los gobiernos ni mucho menos de unos partidos políticos empeñados en contemplar el futuro con horizontes electorales sino de toda la sociedad. Toda ella ha de estar interesada en perfilar las etapas que habremos de recorrer para recuperar una senda de progreso amplia, no solo para la mayoría sino, en especial, para los que padecen mayor riesgo de exclusión. Que la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos es enorme es ya una impresión compartida por la mayor parte de la población. Esta opinión se ha extendido durante los últimos años al tiempo que se dejaban sentir las dolorosas consecuencias de la crisis en múltiples aspectos de la vida individual y colectiva. Pero sería un error concluir de estas graves dificultades que no es posible recuperar la prosperidad y volver a progresar.

Hay que poner el foco en cuatro aspectos que es imprescindible contemplar cuando se desea avizorar las características del crecimiento al que puede aspirar la economía española a la salida de la crisis, el cambio en el patrón de capitalización, la adaptación a un escenario competitivo caracterizado por la fragmentación de las cadenas de producción, el ajuste entre formación y empleo, y la corrección de las desigualdades que ponen en riesgo la inclusión social de los grupos de ciudadanos más desfavorecidos. Pero sería un error concluir de estas graves dificultades que no es posible recuperar la prosperidad y volver a progresar.

Lo realista es factible, pero para lograrlo es preciso hacer el esfuerzo de cambiar el funcionamiento de muchas unidades y numerosos mecanismos de nuestra economía, adaptándolos a las circunstancias actuales. Si se abordan esos cambios con decisión, el progreso y la prosperidad volverán. Si el temor a los costes que esos cambios puedan representar o las resistencias ,el estancamiento será más duradero y sus consecuencias más dolorosas.

Por consiguiente, el enorme impacto que representa la crisis debe servir como catalizador de una nueva modernización de la economía. Para alcanzar esas metas será preciso un compromiso mayoritario a favor de los cambios necesarios y la disposición a realizar los muchos esfuerzos de adaptación precisos. Las dificultades persisten en la actualidad, pero también hay cambios esperanzadores que indican que estamos corrigiendo algunos de los desequilibrios que han agravado la crisis.

Toda prudencia es poca dadas las muchas variables que pueden influir en la trayectoria de las economías en un mundo tan complejo e interconectado como el actual, pero en los últimos meses se van acumulado indicios de que el crecimiento volverá, aunque todavía sea escaso para nuestras necesidades. Es preciso que los avances en generación de renta y empleo pasen a ser vigorosos y duraderos, pero para que eso suceda es necesario profundizar en las reformas y abordar todavía numerosos problemas, tanto en el sector público como en el privado.



España y los españoles saldrán de esta traumática experiencia reforzados si admiten que hacen falta muchos cambios. Se trata de reflexionar y hacer propuestas que van más allá del necesario cambio en la coyuntura macroeconómica, planteando temas que son relevantes para entrar en una etapa distinta y duradera de desarrollo.

Seguiremos sufriendo también las consecuencias para nuestro bienestar colectivo de tener un sector público con ámbitos de mejora relevantes, en los que se da respuesta adecuada las expectativas de los ciudadanos. Dos factores clave para competir en el mundo actual: apoyarse en los activos intangibles y aprovechar las oportunidades de la fragmentación de las cadenas de producción y la deslocalización de actividades. Asimismo, subrayamos la importancia de reducir el desempleo. La crisis actual forma parte de un proceso de transformación de la economía mundial de enormes dimensiones que está desplazando su centro de gravedad y provoca desequilibrios en muchos países. España y Europa se están adaptando con dificultades a esas mutaciones

La Unión Europea debe acompañarse de una estrategia y calendario preciso, planteando una armonización entre los factores económicos, políticos y sociales de la Unión Europea, para dejar atrás la política económica neoliberal que obstaculiza la reconstrucción –tal vez con un nuevo tratado sería posible- de las capacidades de cohesión interna de la Unión y de los paradigmas económicos y políticos, ahora extraviados, pero que un día hicieron de Europa un conglomerado de países con mayor influencia y prestigio en la política internacional.

Millones de ciudadanos esperan que la Unión Europea sea un polo de progreso y de crecimiento. Un mundo con tantos agentes interactuando y tantos factores influyendo en las economías cambia sin cesar y no es sencillo para las empresas o los trabajadores adaptarse a él, ni individual ni colectivamente. Esta inercia ha alimentado desequilibrios como el desempleo y la acumulación de deuda frente al exterior en algunas economías avanzadas. No obstante, paulatinamente se están produciendo importantes avances en Europa

Las carencias en la gobernanza de la UE y de la zona euro, han sido muy graves y condicionan la capacidad de enderezar una situación que, en la mayoría de los Estados miembros, sigue siendo preocupante.

El avance de la integración del continente sigue siendo una vía muy razonable para que sus economías cooperen al adaptarse a un escenario global en el que compiten con países mucho más grandes.

Sin embargo, la flexibilidad que acompaña al método comunitario acaba generando tantas asimetrías e inconsistencias que impide respuestas únicas y ágiles cuando son necesarias. Como consecuencia de esta insuficiencias, la confianza en el proyecto europeo se ha debilitado, en particular en los países de la periferia europea severamente afectados por la crisis. Las pymes de los países más afectados por la crisis sufren más las consecuencias de la desintegración, pues son dependientes del acceso a un crédito que ahora es menor en los países vulnerables y mucho más caro.

Las tensiones de estos años dentro de la UE han dejado claro que no deben esperarse avances importantes a corto plazo en los mecanismos de mutualización de deudas ni en la unión fiscal. La aprobación del mecanismo único de supervisión bancaria es una decisión relevante, pero es necesario poner en marcha también el mecanismo y fondo único de resolución y el fondo europeo de garantía de depósitos. Mientras tanto, es fundamental facilitar financiación a costes más reducidos a los países vulnerables, siendo prioritaria la puesta en marcha de más medidas por parte del Banco Central Europeo.

Recesión y medidas de ajuste. Los estímulos monetarios son los únicos relevantes con los que cabe contar a escala europea dada la escasa importancia del presupuesto de la UE y las enormes limitaciones para desarrollar políticas fiscales coordinadas con una visión que vaya más allá de los intereses nacionales, pues las políticas de austeridad ralentizan también la reducción del apalancamiento del sector privado empresarial y de las familias, fuertemente endeudados en muchas economías.

Se han dado pasos que implican una supervisión económica y presupuestaria más rigurosa de los Estados miembros en la zona del euro, pero los resultados no inspiran confianza para mejorar los niveles de financiación . Por tanto, el avance de la competitividad requiere mejoras de productividad compatibles con la creación de empleo y crecimiento, basadas en la generación de valor añadido y la mayor utilización de la capacidad instalada.

En España será difícil un mayor ritmo de avance en la solución de los problemas mientras el nivel de actividad no aumente. Para que esto suceda es crucial ir eliminando las dificultades financieras que padecen muchos agentes y limitan su capacidad de gasto aunque la mejora del sector exterior es el aspecto de la competitividad que ha mostrado más pronto mejoras pese a no contarse con un tipo de cambio propio.

El valor de estas mejoras es crucial a corto plazo, porque el saldo comercial ha sido la única contribución positiva con el turismo a la economía española

Una atención insuficiente al papel de los activos ligados al conocimiento muchos de ellos intangibles, como la información digitalizada, la I+D+i o la formación en la empresa de los que dependen la eficiencia productiva y la competitividad en las economías avanzadas.

El retraso en la adopción de reformas estructurales en la época de bonanza, como la del mercado de trabajo o las medidas para impulsar la competencia en el mercado interno y la presencia de más empresas en los mercados internacionales. En estas circunstancias, nuestra capacidad de aprovechar los recursos en un escenario competitivo abierto, complejo y exigente como el actual, se resiente. Una parte importante de la economía española ha hecho insuficientes esfuerzos de adaptación al mismo, es menos productiva y más rígida de lo que requiere un mundo tan cambiante. En consecuencia, proporciones muy relevantes del tejido productivo español y buena parte de los recursos humanos y las instituciones económicas necesitan reformas, cuando no reconversiones en profundidad

La dureza de la crisis ha hecho más visibles estos problemas y ha vencido algunas resistencias al cambio, pero otras siguen existiendo y probablemente lo hacen más doloroso, pues no permiten evitar las causas pero dificultan las soluciones.

Otra parte del tejido productivo español ha seguido ya una estrategia diferente, apostando por el crecimiento basado en el conocimiento. Esto ha mejorado sus oportunidades de competir con las empresas y los países de nuestro entorno al gestionar los recursos con instrumentos que permiten elevar la eficiencia. España lleva décadas padeciendo tasas de desempleo elevadas durante largos periodos de tiempo. Las crecientes tasas de actividad de una población cada vez más formada y las fuertes corrientes migratorias no han sido asimiladas por la economía española, llegando el paro a tasas récord en 2013.

## **El desempleo presenta perfiles de enorme gravedad**

El número de parados es muy elevado, con una tasa superior al 26% y una cifra cercana a los seis millones, un volumen que se tardará mucho años en reducir sustancialmente y del que se deriva un horizonte de desempleo duradero para muchas personas.

Las tasas de paro son mucho más altas entre los jóvenes y las personas con menor cualificación, pues sufren más las consecuencias de la destrucción de empleo y la competencia de las economías emergentes. Para estos trabajadores el horizonte de paro de larga duración representa riesgos de exclusión y una alta probabilidad de dependencia de las políticas de protección social. Las graves consecuencias del problema han inducido reacciones que son perceptibles en los indicadores más recientes: moderación salarial, prolongación de los estudios, retirada del mercado de trabajo y emigración.

Sin embargo, la intensidad de esas respuestas es insuficiente para que este desequilibrio se corrija a un ritmo que evite que el desempleo se haga crónico entre parte de la población.

En estas circunstancias, resulta llamativa la debilidad de las políticas activas de empleo dirigidas a los desempleados más vulnerables.

**Aumento de la desigualdad y riesgo de pobreza.** La carga de la crisis está siendo soportada de forma muy desigual por los diferentes estratos de ingresos



Los grupos de ingresos superiores la han padecido menos porque su posición de partida era mejor y su renta se ha reducido menos.

En cambio, la renta personal disponible de las familias con menores ingresos ha experimentado caídas porcentuales mayores a pesar de la amortiguación proporcionada por las prestaciones sociales, de las que son ahora muy dependientes.

El empeoramiento del mercado de trabajo apunta un avance en la desigualdad de la renta de mercado y la renta disponible en los últimos años, incluso después de la intervención pública. Además las prestaciones sociales por perceptor se han reducido, lo que puede estar agravando la situación de algunos colectivos vulnerables a la pobreza. Resulta inquietante que puedan afectarles cambios en los criterios de acceso a servicios públicos que son fundamentales para la igualdad de oportunidades. **La crisis, junto con los desequilibrios domésticos e internacionales que están en el origen de la misma, está obligando a afrontar problemas difíciles con urgencia y de manera simultánea.**

Las circunstancias desfavorables hacen más complicada su solución, lo que en algunos casos hace crónicos los problemas y en otros los agrava, generando círculos viciosos de desequilibrios que van del sector privado al público y viceversa. Un corolario de esta situación es que las expectativas económicas se han oscurecido para buena parte de los españoles, tras un quinquenio de estancamiento y desempleo creciente.

Los jóvenes y adultos de mediana edad están teniendo que asimilar el shock que representa pasar de disfrutar experiencias de progreso sostenido a lo largo de casi toda su vida a sufrir dos recesiones graves en apenas cinco años y tener unas perspectivas de empleo muy negativas.

La actual falta de horizontes de progreso ha desembocado en un deterioro muy grave de la confianza en la capacidad de las instituciones de responder a los problemas colectivos, que se ha visto acentuado por casos relevantes y abundantes de corrupción política.

**Todo ello ha generado un clima de amplia desconfianza social en las posibilidades de dar respuestas colectivas a los problemas que se plantean para afrontar el futuro.**

Una actitud positiva frente a las mismas no debe negar que el camino a recorrer será largo y resultará particularmente complejo para aquellos grupos sociales con mayor riesgo de exclusión laboral.

La dimensión de las actuales bolsas de desempleo y las débiles perspectivas de crecimiento de la ocupación hacen previsible que tengan muchas dificultades para su inserción, máxime si no se plantean pronto políticas activas en esta dirección. Los jóvenes y los trabajadores menos cualificados tienen sólidas razones para sentirse muy preocupados y reclamar una mayor atención a sus problemas y la sociedad debería ocuparse de dar respuestas a los mismos.

El enderezamiento de la trayectoria de la economía española exige enfrentarse a retos de distinta naturaleza y gran calado, contemplando horizontes de corto y largo plazo

Entre los retos el primero, sin duda, es volver a crear empleo creciendo con suficiente intensidad. Para conseguirlo es urgente que vuelva a fluir el crédito, avanzar en la corrección del déficit público y mejorar las posiciones financieras de las gente que vuelva a fluir el crédito, avanzar en la corrección del déficit público y mejorar las posiciones financieras de las empresas y familias. Todo ello deberá desembocar en una recuperación de la demanda interna que, junto con el impulso sostenido de la demanda exterior, mejore la utilización de la capacidad instalada hasta volver a impulsar la inversión. Mientras no haya una creación de empleo significativa es difícil esperar la recuperación del consumo, salvo la que genere la mejora de la confianza derivada. Por tanto, dado que el ajuste del déficit público continuará aunque sea a menor velocidad, la demanda exterior seguirá siendo clave para sostener la recuperación en el futuro próximo.

**El empleo es la clave** .Por eso, la enorme destrucción de ocupación de los últimos años ha deteriorado gran parte de nuestro capital social.

Un alto riesgo de caer en el desempleo y la elevada dificultad de salir de él reducen la renta permanente esperada de las familias, deprimen la demanda de consumo y las expectativas de los inversores. Por estas razones, la recuperación de la demanda interna requiere un estímulo que solo puede proporcionar una abundante creación de empleo. Se trata de un objetivo que ha sido difícil de lograr en España excepto en las fases en las que la construcción ha actuado como motor del proceso, un elemento con el que en esta ocasión no se puede contar y solo puede ser sustituido por la captación de la abundante demanda exterior y el desarrollo de nuevas actividades. Sin poner fin a la intensa contracción del crédito es difícil que las decisiones de gasto de empresas y familias no resulten condicionadas a la baja, frenándose la demanda de consumo e inversión: Un cambio de tendencia en el crédito bancario requiere avanzar en tres direcciones: la conclusión de la fase de saneamiento de las entidades, la restauración del acceso de los bancos a los mercados y la mejora del clima general de confianza en la recuperación.

Completar con éxito la reestructuración bancaria y despejar las incertidumbres sobre la necesidad de nuevos saneamientos es una condición necesaria para que los bancos tengan acceso a los mercados mayoristas a precios razonables. Para ello, nada mejor que la prueba de resistencia que está preparando el Banco de España anticipándose a las pruebas de resistencia que se realizarán a escala europea en 2014, antes de la puesta en marcha del mecanismo único de supervisión.

Si el crecimiento se va confirmando, la recuperación de la confianza también avanzará y, probablemente, la componente subjetiva presente en las decisiones de financiación volverá poco a poco a valores positivos.

Mientras tanto, las medidas recientemente aprobadas como parte de la hoja de ruta de la UE para mejorar el acceso a la financiación de nuestras empresas que supondría la normalización del canal del crédito privado. **La experiencia de estos años muestra los peligros de no cortar una trayectoria de déficit insostenible**

**pero también el riesgo de hacer los ajustes contribuye a acentuar la recesión.**

El Programa de Estabilidad aprobada por la Comisión Europea busca un nuevo equilibrio del ritmo de consolidación presupuestaria, moderando los ajustes. Junto al establecimiento de objetivos de consolidación que no perjudiquen la recuperación, es también muy importante el cumplimiento efectivo de los mismos, resultado que España nunca antes ha conseguido y es crucial alcanzar en estos momentos.

Si se confirma la viabilidad a medio plazo de las finanzas públicas el clima de tranquilidad en el mercado de deuda se consolidará y el coste de financiarla se reducirá, facilitando el camino que queda por recorrer hasta el logro de superávits que permitan reducir un stock de deuda que en 2014 se acercará al 100% del PIB.

El endeudamiento de empresas y familias se está reduciendo a pesar de la caída de la renta disponible. Se debe a la caída del consumo y la inversión y también a la dificultad para obtener o renovar créditos.

El reto en este terreno es pasar de un desapalancamiento obligado por las circunstancias a otro favorecido por la mejora de la competitividad, el crecimiento de la renta y del ahorro ahora en niveles mínimos y la prudencia financiera. Una de las dimensiones más preocupantes del elevado apalancamiento ha sido la dependencia financiera del exterior y las consecuencias para España de un estrangulamiento de los mercados mayoristas internacionales.

La condición para reducir esa dependencia paulatinamente es el superávit de la balanza por cuenta corriente y, afortunadamente, ese requisito se ha logrado. Continuar por esa senda es otro reto a corto plazo de la economía española que dependerá tanto de que se mantenga el crecimiento de las exportaciones, como de que las importaciones contengan su ritmo de crecimiento en el periodo de recuperación del PIB gracias a la competitividad recobrada. La mejora de la competitividad exterior e interior es un desafío para el crecimiento a largo plazo de la economía española,



pero también una palanca de enorme importancia para su trayectoria a corto plazo por dos motivos: Porque la dificultad de contar con aportaciones positivas de otros componentes de la demanda agregada hace decisivas las contribuciones del saldo exterior para mantener las variaciones de la demanda en positivo.

Por la importancia del saldo positivo de la balanza por cuenta corriente para reducir el elevado endeudamiento externo y mejorar la posición financiera neta de nuestra economía.

Sostener el impulso de la demanda exterior pasa, a corto plazo, por mantener y mejorar la competitividad-precio mediante la moderación de costes y márgenes, en línea con lo que viene sucediendo en los últimos años.

Pasa también por mayores esfuerzos de las empresas y del sector público para mejorar la presencia de los productos españoles en los mercados exteriores, teniendo presente está necesidad al realizar los presupuestos y orientar las prioridades de las políticas.

Numerosos desafíos a los que se enfrenta la economía española necesitan actuaciones duraderas y no cabe esperar resultados inmediatos. Sin embargo, se trata de retos muy importantes para recuperar una trayectoria de crecimiento sostenido y mejorar nuestras condiciones de vida a medio plazo. Por tanto, que los resultados vayan a tardar hace que los problemas deban ser abordados más pronto y no más tarde, contemplándolos con un horizonte temporal adecuado, para evitar la impaciencia. La reorientación del patrón de acumulación, los cambios en el tejido productivo para aprovechar las oportunidades del escenario competitivo internacional, las actuaciones en el sistema educativo y en el mercado de trabajo o las acciones para reducir el riesgo de pobreza.

El proceso de capitalización física de la economía española ha sido prolongado e intenso el capital por empleado es elevado y su mantenimiento absorbe la mayor parte de la inversión bruta anual. Por tanto, la prioridad no es aumentar las dotaciones de capital por ocupado sino el empleo

En la actualidad en España no falta capital físico sino capacidad de utilizarlo y generar recursos para pagar la deuda con la que se financió su inversión en la época del crédito barato.

Tampoco escasea el capital humano, acumulado con intensidad en los últimos treinta años y que eleva el potencial de servicios que puede desplegar la población activa española en el mercado de trabajo, pero desaprovechado en parte. La pobre trayectoria de la productividad indica que el potencial productivo español no fue bien utilizado durante los años de expansión ni tampoco desde el comienzo de la crisis, dado el escaso uso de la capacidad instalada y los recursos humanos disponibles.

Para responder a esos retos hacen falta proyectos empresariales y empresarios capaces de movilizar los factores productivos y generar valor añadido, es decir, salarios y beneficios.

Para ello es necesario apoyarse más en el conocimiento, y en particular en activos basados en el mismo que permiten mejorar la gestión de la información, los recursos humanos y las organizaciones.

Para ello es necesario apoyarse más en el conocimiento, y en particular en activos basados en el mismo que permiten mejorar la gestión de la información, los recursos humanos y las organizaciones. Los países que están dando mejor respuesta a la crisis son los que más invierten en I+D y en la mejora del funcionamiento de sus organizaciones, pero España no se encuentra bien posicionada en este campo a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años. Nuestras mayores debilidades se encuentran en el reducido peso de la I+D y los gastos destinados a la mejora del funcionamiento interno de las empresas, incluida la formación de los trabajadores en el puesto de trabajo. Los bajos niveles educativos de muchos trabajadores y empresarios y el elevado grado de temporalidad son reflejo de ello. Para competir en la actual economía del conocimiento y la complejidad y que necesitan estrategias de actuación sostenidas. La crisis está poniendo en riesgo parte de las ya iniciadas, interrumpiendo inversiones públicas y privadas en I+D+i o en formación cuando sería preciso reforzarlas

España padece debilidades competitivas dados sus niveles de renta y costes, que se deben tanto a su especialización como al entorno y al interior de las empresas. Un cambio de especialización de la economía española requiere que las actividades se orienten más hacia las que generan valor y permiten aprovechar su capital y trabajo no utilizados.

Para avanzar en esa dirección es imprescindible tener presentes las exigencias tecnológicas y competitivas de una economía mundial caracterizada por la fragmentación de los procesos productivos y la terciarización creciente del comercio internacional.

Las experiencias de numerosas empresas multinacionales en nuestro país, en distintos sectores, confirman que aquí es posible alcanzar niveles de productividad y competitividad elevados. España sigue contando con ventajas de costes para ser un territorio atractivo a las inversiones extranjeras, en especial tras las caídas de precios de los últimos años y dada la abundante oferta de recursos actualmente existentes.

Nuestras dotaciones de infraestructuras y oferta de mano de obra abundante de cualificación alta, y los salarios, costes del suelo y alojamiento inferiores a los de muchas economías europeas, deben servir como base para que determinadas actividades se localicen en España. Somos una economía con fortalezas competitivas ahora desaprovechadas que hay que poner en valor. Las mejoras de los niveles medios de productividad y competitividad de un sector o un país dependen de que aumente el porcentaje de empresas que están próximas a las mejores prácticas. En España esta frontera eficiente está formada con frecuencia en cada uno de los sectores por empresas multinacionales extranjeras o nacionales y las distancias a la misma de buena parte del tejido empresarial son muy elevadas. Corregir esa situación es otro de los retos relevantes a medio plazo y los estímulos para avanzar deben venir de la intensificación de la competencia y la mejora de las capacidades de las empresas. Las empresas padecen debilidades internas sobre todo las de menor tamaño asociadas a los perfiles de los trabajadores

asociadas a los perfiles de los trabajadores y a los bajos niveles de formación de muchos empresarios.

Cuando la gestión no está en manos de directivos profesionales, las estrategias dependen con frecuencia de propietarios con escasa cualificación para manejar la actual complejidad tecnológica de las organizaciones y de los mercados. Las empresas grandes y las multinacionales, gestionadas con frecuencia por directivos profesionales, logran mayores niveles de eficiencia y productividad. El aprovechamiento del potencial de las empresas requiere mejorar el entorno para hacer negocios, profesionalizar la gestión y mejorar la adecuación de la oferta de capital humano a las necesidades productivas. Pese a los avances conseguidos, buena parte de nuestro tejido productivo presenta carencias sustanciales en el perfil formativo de empresarios y gerentes respecto a los estándares de otros países desarrollados.

Esto contribuye a que la capacidad de la economía española de generar ocupaciones cualificadas resulte insuficiente.

El logro de un tejido productivo más eficiente pasa, entre otras cosas, por conseguir también una mayor movilización laboral y emprendedora de los jóvenes.

Sin su participación será difícil reducir la brecha que separa a buena parte de nuestras empresas de las de otras economías mucho más intensivas en el uso del conocimiento en cuanto a profesionalización y formación de los gestores. Mejoras en la productividad del trabajo y la formación Los avances durante los años de crisis de la productividad del trabajo se han debido a la intensa destrucción de empleo en actividades y ocupaciones poco cualificadas que ha aumentado el peso de las más productivas.

El reto es que la tendencia positiva de la productividad continúe mientras la economía crece, crea empleo y cambia su composición hacia el uso más intenso y productivo del capital humano. Para ello es necesario incrementar los puestos de trabajo correspondiente a las ocupaciones..cualificadas, que quienes los ocupan sean productivos y que las empresas gestionen esos recursos adecuadamente



Las previsiones europeas son que dos de cada tres puestos de trabajo creados en España sean cualificados, siendo necesario contar con los recursos humanos adecuados en conocimientos, competencias y actitudes para cubrir una demanda cada vez mayor de capital humano y el desempeño de puestos en los que pueden ser más productivos. La formación tiene que ser el complemento del cambio de especialización y estar adaptada a las necesidades de unas empresas mucho más basadas en el conocimiento. El reto es avanzar en esa dirección reforzando la colaboración entre dos orillas hoy insuficientemente conectadas y llamadas a mantenerse en estrecho contacto. Inclusión laboral de jóvenes y parados de larga duración. El desempleo afecta gravemente a todos los colectivos pero se concentra de modo muy especial en los individuos con menor formación y en los jóvenes. La falta de cualificación de buena parte de la población parada y, simultáneamente, la dificultad de crear puestos de trabajo altamente cualificados en comparación con otros países, es una tenaza que está inmovilizando a España

Los efectos de la crisis y las reformas laborales realizadas han empezado a modificar comportamientos de los agentes y las instituciones laborales, pero de forma tardía y un tanto vacilante. Los salarios muestran mayor moderación y aumenta la importancia del trabajo a tiempo parcial, la manifestación más clara en España de un cierto reparto del trabajo de las respuestas, sobre todo en el caso de los parados menos cualificados. Siendo quienes más necesitan complementos de formación para mejorar su empleabilidad, son los que menos cursos realizan, incluso con menor intensidad que antes de la crisis. El mayor reto para el resto de esta década será la creación de empleo para parados con escasa formación. Si no se quiere aceptar un paro elevado y duradero para los menos cualificados es necesario un plan que contemple paliar el problema: aprovechar con decisión el potencial flexibilizador del nuevo marco surgido de las últimas reformas del mercado de trabajo para facilitar en la medida de lo posible la creación de empleo, estimularlas y ofrecer segundas oportunidades formativas.

El aumento del número de personas y hogares en el extremo inferior de la distribución de la renta equivale a un aumento del riesgo de pobreza. **El acceso al empleo es clave** en este sentido y en su defecto la labor compensatoria de las políticas públicas también. En los años recientes de fuerte destrucción de puestos de trabajo se ha hecho mucho más relevante ese papel redistributivo de los ingresos y, sobre todo, los gastos públicos y no se pueden ignorar las cargas que representa para un sector público con importantes déficits y fuerte endeudamiento. Si no se aborda la causa del problema, la escasa capacidad de generar empleo sus consecuencias pueden poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de protección social. Por lo tanto, responder al problema social que representa el riesgo de pobreza pasa por recuperar el crecimiento y las oportunidades laborales de los menos cualificados. Por consiguiente, el despliegue de políticas activas de empleo mucho más ambiciosas que las desarrolladas hasta ahora es fundamental también desde la perspectiva de la inclusión social.

Las dificultades financieras de los gobiernos hacen evidente la importancia de que los servicios públicos se presten de manera eficiente, minimizando costes y maximizando el volumen y calidad de los mismos.

Sin embargo, la escasa tradición de orientar la gestión pública en esa dirección y las urgencias de los ajustes presupuestarios hacen que muchas reformas no tengan hojas de ruta claras para mejorar la eficiencia.

Los retos en este terreno son importantes pues el sector público se enfrenta a un horizonte restrictivo duradero y si no logra mejorar su eficiencia lo sufrirán los ciudadanos.

El actual Programa Nacional de Reformas adolece de una carencia de fondo que viene afectando a todas las actuaciones en este terreno: la evaluación sistemática ex-ante y ex-post de las políticas, basada en sistemas de información adecuados. En este sentido, la desproporción entre la amplia extensión de estas prácticas en las políticas macroeconómicas y su escasa utilización en otros muchos campos es incomprensible y debe ser corregida

Algunos servicios públicos, como la educación y la sanidad, son fundamentales para igualar las oportunidades de los ciudadanos en asuntos tan importantes como la formación y la salud, y son muy relevantes para moderar la desigualdad efectiva de la renta disponible ajustada. El acceso a estos servicios públicos es particularmente importante para los grupos sociales con menor nivel de ingresos y más amenazados por el riesgo de pobreza. El sector público es decisivo para garantizar la financiación de esos servicios en condiciones que favorezcan la equidad, es imprescindible hacer esfuerzos por mejorar la información y los análisis objetivos sobre estos temas, para identificar y poner en valor las buenas prácticas en este terreno, tanto desde la perspectiva de la eficiencia como de la equidad. Los retos de cara al futuro en relación con el logro de una financiación de los servicios públicos fundamentales que promueva la igualdad de oportunidades en España son tres: la sostenibilidad financiera del gasto público a medio y largo plazo, amenazada por los gastos asociados al envejecimiento; la existencia de grandes diferencias de recursos por habitante entre territorios, responsables de la prestación de estos servicios; y la falta de evaluación sistemática de los resultados de las políticas educativas y sanitarias,

La respuesta a los retos a los que se enfrenta España requiere actuaciones capaces de corregir desajustes, impulsar mejoras y minimizar los costes que representa permanecer en la situación actual.

Conseguir estos objetivos no es sencillo pero ignorarlos puede hacer más difícil el progreso económico a medio y largo plazo porque implica no tener en cuenta que la máquina de la prosperidad de las sociedades desarrolladas solo funciona cuando la confianza de la mayoría en el progreso mantiene bajos los costes de transacción.

Gracias a ello en buena medida, la productividad mejora a pesar del incremento de la complejidad. Sin ese capital social el gobierno de economías y sociedades tan heterogéneas como las actuales resulta mucho más difícil y la eficiencia económica y social se resiente. Además de justificarse por qué los sentimientos de solidaridad hacen a muchas personas preferir una sociedad sin excluidos , una perspectiva utilitarista con visión de largo plazo , también..

aconsejaría contemplar el crecimiento y la competitividad como partes de un proceso más amplio de desarrollo social. Las propuestas relacionadas con la mejora de la competitividad son actuaciones imprescindibles para que el tejido productivo cambie su composición y ganen peso las empresas y actividades intensivas en conocimiento, haciéndonos más capaces de progresar en los mercados internacionales como ya hacen las mejores compañías españolas. Promover la inversión en intangibles España necesita extender sustancialmente por todo su tejido productivo el uso intensivo de la información digitalizada, la I+D, el diseño de nuevos productos, la investigación de mercados y la formación en la empresa, así como realizar un esfuerzo por mejorar la estructura organizativa de muchas compañías. Las actuaciones a desarrollar pasan por concienciar a quienes toman decisiones en las empresas de que estos activos intangibles son tanto o más productivos que otros tangibles, que como aquellos no ofrecen su rendimiento de manera inmediata sino a medio y largo plazo.

Se necesita un impulso a la formación continua de los empresarios...con y sin asalariados, y a la profesionalización de la gestión mediante la contratación de directivos. La escasa formación de quienes toman decisiones también representa un riesgo financiero, que es más elevado para aquellos empresarios autónomos que inician actividades y arriesgan sus ahorros sin un apoyo adecuado. Es imprescindible la concienciación acerca del problema y las ofertas formativas para reducir los riesgos básicos que sean evitables. Es necesaria la promoción del capital humano de mayor cualificación en los puestos de decisión de las empresas, mediante la contratación de titulados superiores como directivos, el fomento de las vocaciones empresariales y la formación como emprendedores de parte de los universitarios. Para facilitar ese cambio es preciso contar con una oferta creciente de profesionales con el perfil adecuado en conocimientos, habilidades y actitudes, a través de actividades de formación de postgrado y formación continua más abundantes, dada la dimensión del tejido productivo a transformar. con y sin asalariados, y a la profesionalización de la gestión mediante la contratación de directivos. La escasa formación de quienes toman decisiones también representa un riesgo financiero.



Que es más elevado para aquellos empresarios autónomos que inician actividades y arriesgan sus ahorros sin un apoyo adecuado. Es imprescindible la concienciación acerca del problema y las ofertas formativas para reducir los riesgos básicos que sean evitables. profesionales con el perfil adecuado en conocimientos, habilidades y actitudes, a través de actividades de formación de postgrado y formación continua más abundantes, dada la dimensión del tejido productivo a transformar. Las universidades públicas deberían desarrollar acciones mucho más decididas en este terreno en colaboración con las empresas. El sector exterior ha de seguir siendo un motor permanente y no un cuello de botella del crecimiento y el empleo, aprovechando a fondo las ventajas asociadas a la fragmentación internacional de las cadenas de producción. La participación de las empresas españolas en ese terreno tiene que ser facilitada para hacer crecer el número de las que exportan y difundiendo información sobre cómo acceder a las ventajas de la externalización internacional de actividades para valorar sus efectos a medio y largo plazo. La expansión de estas actividades a un número de empresas mayor requiere formación e instrumentos financieros adecuados para abordar proyectos cuya maduración puede ser larga.

La demanda de conocimiento por las empresas ha de crecer por el aumento del volumen de actividades de intensidad tecnológica media y alta, por la penetración del capital humano en el resto de actividades y en el porcentaje de puestos directivos, técnicos y profesionales desempeñados por personas con la titulación adecuada. Estos cambios pueden ser una vía importante para retener talento y recuperar parte del que sale al exterior y puede volver con experiencias muy valiosas. Ese proceso de penetración del capital humano ha de ser impulsado por las empresas haciéndose sensibles al potencial productivo de los mejor formados, por las instituciones de educación superior mejorando la empleabilidad de los titulados mediante una formación excelente y adecuada a las demandas y por la información sobre la calidad de los resultados educativos que contribuye a la adopción de decisiones de inversión en talento mejor informadas. Un aspecto específico de la atracción, retención y recuperación del talento es el referido a las actividades de I+D, seriamente afectadas por la crisis.

Se necesita reforzar la presencia del conocimiento en la sociedad y la economía española, y la formación de los formadores, facilitando la generación de nuevos conocimientos y especialmente su uso por las empresas. El logro efectivo de estos objetivos no solo se garantiza con la aportación de más recursos públicos: requiere visión de largo plazo y criterios selectivos en el apoyo público y privado a las instituciones, los grupos y las personas dedicadas a la I+D, basados tanto en su capacidad de producir resultados como, en su caso, de transferirlos al tejido productivo. La competitividad en una economía requiere que las empresas tengan capacidad de adaptación y elevada flexibilidad tecnológica de sus organizaciones y de sus empleados. España y los agentes sociales necesitan hacer una apuesta leal por la flexibilidad que debe ir acompañada de información y de garantías de seguridad para los trabajadores. El desarrollo de la reforma laboral en esa dirección es una cuestión de cultura entre los empresarios, los trabajadores, los asesores, los jueces y de aplicación de la regulación.

Los desequilibrios financieros permanentes del sector público no son sostenibles y no contribuyen a elevar el crecimiento. Pero la estabilidad presupuestaria contribuirá más a la competitividad si va acompañada de una priorización de gastos adecuada. Se necesita contemplar con atención el volumen y la eficacia de la inversión en capital humano, la inversión en infraestructuras y la inversión en intangibles. Son ámbitos en los que el sector público no ha sido capaz de preservar la regularidad del esfuerzo inversor cuando es necesario trabajar con horizontes de largo plazo y definir políticas de Estado, protegidas no solo del ciclo económico sino del político. El buen gobierno de los asuntos públicos es condición necesaria para la mejora de la competitividad. La mejora de la competitividad española requiere medidas que pueden tener efectos colaterales sobre las oportunidades de grupos sociales con menores recursos debido a varias causas: a que sus ventajas competitivas .La mejora de la competitividad española requiere medidas que pueden tener efectos colaterales sobre las oportunidades

de grupos sociales con menores recursos debido a varias causas: a que sus ventajas competitivas en los mercados de factores son menores en la actualidad; a la importancia de fomentar el uso de recursos educativos que ciertos grupos poseen en menor medida; y a las implicaciones que la estabilidad presupuestaria puede tener sobre los gastos sociales. Es peligroso ignorar los riesgos que representa para el desarrollo a largo plazo no lograr un crecimiento incluyente, de cuyos frutos participe toda la población. Por esa razón, consideramos necesario que la agenda de las políticas a favor de la competitividad vaya acompañada de actuaciones importantes también en este otro terreno. También es necesario desplegar acciones especiales de formación y fomento del empleo dirigidas a los desempleados menos cualificados pues, de otro modo, estos colectivos estarán en buena medida condenados a la exclusión laboral y la dependencia de los subsidios públicos o la asistencia social privada. Se necesitan actuaciones de envergadura en formación para el empleo y fomento del trabajo a tiempo parcial.

Se necesitan actuaciones que movilicen los recursos del sistema educativo reglado y no reglado, de las empresas y de los medios de comunicación públicos, transmitiendo el criterio de que quienes no tuvieron o no aprovecharon sus oportunidades en el pasado deben disponer de segundas opciones para evitar la exclusión laboral.

La participación del sistema educativo puede producirse mediante el uso de sus instalaciones y sus profesionales en el reciclaje de personas con carencias básicas en comprensión lectora y en matemáticas, y también instrumentales (idiomas, informática).

**La contribución de las empresas sería importante para orientar a los desempleados sobre qué demanda el mercado de trabajo.**

En ambas tareas deberían aprovecharse a fondo las posibilidades que ofrecen los medios de comunicación de masas y las nuevas tecnologías para llegar a audiencias muy amplias.

## **Reforma fiscal y lucha contra el fraude**

El sistema fiscal español debe reformarse para favorecer la visión del mismo como un conjunto de impuestos coordinados, comprensibles en sus funciones y con capacidad recaudatoria.

Debe abordar una simplificación de distintos impuestos (IRPF, IVA, Sociedades) ampliando las bases y eliminando deducciones sin poner en peligro la recaudación.

Es necesario aumentar los recursos de la administración tributaria que permiten adaptarla a los cambios tecnológicos necesarios para hacer un seguimiento eficaz de las bases imponibles y luchar contra el fraude.

La reforma debería abordar la coordinación internacional y con las administraciones territoriales, en particular con las comunidades autónomas, que deberían elevar su responsabilidad fiscal y participar en el gobierno de la administración tributaria que gestiona sus ingresos.

## **Garantizar públicos fundamentales**

El paro elevado y duradero y otras circunstancias que concurren en los hogares con niveles de ingresos muy bajos hacen más relevante garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales a todas las personas, en especial a los que padecen riesgo de pobreza. En este sentido, las necesarias políticas orientadas a incentivar la corresponsabilización de los usuarios de los servicios públicos mediante tasas o copagos deben ir acompañadas de medidas que eviten el riesgo de impedir el acceso a los mismos a ciertos colectivos. El gasto público aumenta durante las crisis pero también por efecto del crecimiento del gasto en pensiones y sanidad, asociado al envejecimiento. Esas tendencias pueden amenazar la sostenibilidad a medio y largo plazo de estas prestaciones. Garantizar la sostenibilidad financiera del sector público con las oportunas reformas de sus ingresos y sus reglas de gasto es condición para que el mismo pueda seguir manteniendo esas funciones al servicio de los ciudadanos en su conjunto y no solo de los que ahora reciben las prestaciones.



## **Impulsar una estrategia de desarrollo ambiciosa y equilibrada**

España necesita abordar numerosos cambios a medio plazo, tanto en el sector público como en el privado, tanto en los marcos normativos como en su cultura económica y en los comportamientos sociales.

El esfuerzo que ello requiere y las resistencias que hay que vencer hacen razonable preguntarse si merece la pena.

La respuesta es afirmativa, tanto más cuanto más amplio es el horizonte temporal considerado, es decir, cuanto más se tenga presente la suerte de las generaciones con más futuro por delante.

Paradójicamente, las dificultades actuales inclinan a mucha más gente a aceptar ahora la necesidad de cambios. Aunque los problemas de competitividad ya estaban presentes cuando el crecimiento era intenso, éste los disimulaba.

Ahora, la recuperación del crecimiento de la renta y el empleo preocupa mucho y se está más dispuesto a buscar soportes al mismo en las reformas.

La crisis nos ha ayudado a admitir que la importante modernización de nuestro país durante el último medio siglo resulta insuficiente como base de una nueva etapa de progreso.

El oscuro horizonte de los últimos años obliga a admitir que el crecimiento español no podrá ser, probablemente, ni vigoroso ni duradero sin una adaptación exigente al incesante cambio tecnológico, al nuevo escenario competitivo mundial y al avance del papel económico y social del conocimiento.

La resistencia inicial a aceptar esa necesidad de cambios ha sido muy perjudicial, pues generó desequilibrios financieros y desembocó en un largo estancamiento que deterioró la confianza externa.

En los últimos meses, el cambio de rumbo interno ha permitido que las perspectivas sobre España mejoren en el exterior.

Sin embargo, la profunda recesión y las graves dificultades de los grupos sociales más golpeados por la crisis han impedido que, por ahora, cale en el interior esa perspectiva de mejora.

El progreso a medio plazo de nuestra sociedad exige perfilar y desplegar una estrategia de desarrollo compleja e inteligente, que requiera una visión amplia y equilibrada de los problemas y los objetivos, los retos a los que nos enfrentamos que, en ocasiones, no son tenidos en cuenta pero es importante considerar y tener en cuenta que los resultados solo se verán a medio plazo, de modo que no debe pedirse a las reformas frutos que no pueden dar antes de madurar. La economía española ha permanecido en recesión durante la mayor parte de los últimos cinco años, acumulando graves dificultades en el ámbito laboral, financiero, empresarial y público. Los desequilibrios externos e internos existentes en 2007 fueron la causa del enorme impacto inicial de la crisis en España, pero la resistencia a aceptar las causas y las implicaciones de los problemas ha dificultado las respuestas a los mismos. A ese retraso se han sumado otros efectos negativos derivados de errores de diagnóstico y actuación de los distintos niveles de gobierno, que también están retardando la recuperación del crecimiento

La pregunta que más interesa a los españoles en la actualidad es cuándo volverá a crecer la economía de manera regular y con una intensidad que les permita apreciar de nuevo las consecuencias positivas de una expansión sostenida sobre el empleo y la riqueza.

La respuesta a esa cuestión depende de la efectividad de palancas que operan tanto del lado de la demanda en general a nivel macroeconómico como por el de la oferta a nivel más bien microeconómico

En este momento., las primeras dependen fundamentalmente de la magnitud del impulso que puedan dar el sector exterior y el crédito.

En cambio, las segundas dependen de la velocidad de los cambios estructurales que fueron aplazados durante la expansión y la crisis ha catalizado, así como de la eficacia de las reformas puestas en marcha para impulsarlos.

Como consecuencia del mismo, la sociedad española se encuentra sacudida en la actualidad por la experiencia que representa un cambio de expectativas muy brusco, que supone pasar de

una experiencia prolongada de mejoras continuadas a otra, también ya duradera, de retroceso o, como mínimo, de estancamiento. También las valoraciones más negativas del funcionamiento de muchas instituciones públicas, de las que se esperaban unas respuestas a los problemas más positivas de las que se observan.

No es sorprendente si se tiene en cuenta que el país ha visto destruirse en cinco años casi cuatro millones de puestos de trabajo, que todavía no se crea empleo y que buena parte de sus habita significativos de su riqueza inmobiliaria o financiera. En estas condiciones es explicable que se haya producido un deterioro de la confianza individual y colectiva, que solo se recuperará cuando los resultados mejoren, en particular en lo referente al empleo. Una consecuencia perceptible del paso a este escenario de expectativas de mejora mucho más limitadas es el fin de la trayectoria de fuerte expansión demográfica, que se desarrolla durante la década que precede a la crisis impulsada por un fuerte saldo migratorio positivo.

La destrucción de empleo se ha convertido en una variable clave para explicar el comportamiento de otras, tanto por el lado de la demanda de bienes y servicios consumo e inversión, ingresos y gastos público como para la oferta al impulsar la productividad por un camino poco deseable. Así pues el retroceso del consumo no va acompañado de un incremento del ahorro como sucedió al comienzo de la crisis sino de una disminución de la tasa de ahorro de los hogares que la sitúa en el 8% desde 2012, a niveles históricamente bajos. Las razones de ello son el retroceso de la renta bruta disponible de los hogares, resultante de la caída del empleo y los salarios y las subidas de impuestos del último año, y el horizonte de persistencia del desempleo.

En cuanto a la inversión, sus tasas de variación siguen siendo negativas. Los datos confirman que el avance de la devaluación interna en estos años se produce a mayor velocidad de lo que la mayoría de analistas esperaban, pero con unos costes sociales más elevados que los que acompañan a las devaluaciones convencionales.

La mejora de competitividad que está en la base de dicha devaluación está siendo clave para el cambio de signo del saldo exterior.

Entre los rasgos a destacar está que a la mejora de las exportaciones contribuyen significativamente tanto la balanza de mercancías como las de servicios, turísticos y no turísticos, siendo estos últimos ya más importantes que los primeros en volumen de ingresos.

En segundo lugar, es también relevante que la mejora de las exportaciones se esté logrando pese a la atonía de los mercados europeos a los que se dirige la mayor parte de la exportación española.

Gracias al fuerte ritmo de crecimiento de las ventas en el resto de continentes la mayoría más expansivos en la actualidad el aumento de las exportaciones ha sido mayor y la dependencia española de los mercados europeos se ha reducido significativamente en estos años.

## **Estrategia de política económica**

La estrategia de política económica española solo tiene dos patas en las que apoyarse la fiscal y la estructural pero necesita equilibrarse con la contribución de otros dos importantes instrumentos los monetarios-financieros y el tipo de cambio que se deciden para el conjunto de la zona euro.

La orientación de la política fiscal española ha sido en los últimos años claramente contractiva, dado el escaso margen financiero existente para el sector público para realizar otra distinta, como consecuencia de los desequilibrios acumulados y del clima de austeridad dominante en el resto de Europa. A los efectos negativos sobre el nivel de actividad de la rápida consolidación fiscal se han sumado los derivados de las distorsiones en los canales de transmisión de la política monetaria del BCE. Esta ha sido laxa pero, pese a ello, España ha sufrido una intensa restricción del crédito y la estrechez de las ventanas de financiación que han ofrecido los mercados a la mayoría de las empresas durante la mayor parte del tiempo.



En estas circunstancias, el único impulso a la demanda ha venido del sector exterior.

El sector público ha insistido en las actuaciones por el lado de la oferta, subrayando la importancia para la recuperación de las reformas estructurales, orientadas a flexibilizar los mercados de factores en especial el de trabajo y de servicios. El Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas son los documentos en los que se contiene la estrategia del Gobierno español en este sentido, y ambos han sido actualizados a principios de 2013.

El Programa Nacional de Reformas distingue cinco ámbitos fundamentales de actuación.

Los dos primeros tienen que ver con la recuperación de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y son, en buena medida, condiciones necesarias para asegurar el normal desenvolvimiento de los sectores público y privado.

Los tres restantes se refieren a distintas palancas o ejes de actuación para fomentar el crecimiento: la primera dirigida a impulsar la competitividad futura

La segunda, a reformar el mercado de trabajo y las políticas de empleo; y la tercera, a modernizar la administración pública. La batería de medidas normativas adoptadas y en curso se mueve en múltiples direcciones, pero mientras las que tienen que ver con el ajuste fiscal tienen efectos contractivos inmediatos, en cambio, las reformas estructurales solo ofrecerán resultados a medio plazo.

Además, excepto las relacionadas con el mercado de trabajo, las restantes están en fase de desarrollo normativo. Esta asimetría temporal, así como la intensidad de los ajustes exigidos por los calendarios europeos de estabilidad presupuestaria en un momento de recesión, han acentuado la caída del PIB y del empleo en España, confirmándose que el valor de los multiplicadores fiscales en esas circunstancias puede ser muy superior al estimado hace unos años. La intensa recesión de 2011 y 2012 ha limitado también la efectividad del potencial recaudatorio de las subidas de impuestos adoptadas, obligando a esfuerzos de ingresos y gastos adicionales para reducir el déficit.

La concentración de los esfuerzos en la contención más severa de los gastos, en especial los de inversión en capital físico y humano, ha impedido el apoyo presupuestario a algunas reformas estructurales relacionadas con el fomento de los activos ligados al conocimiento y las políticas activas de empleo basadas en el capital humano.

A mediados de 2013, la amplia evidencia acumulada sobre los negativos efectos de una elevada velocidad de ajuste fiscal en distintos países y la extensión de la recesión a economías centrales de la UE ha frenado las estrategias de consolidación.

España ha visto ampliarse el calendario de reducción del déficit: el objetivo para 2013 ha quedado finalmente fijado en el 6,5% del PIB. Los desequilibrios externos e internos fueron la causa del enorme impacto inicial de la crisis en España. La respuesta a los mismos se ha visto dificultada por la resistencia a aceptar cambios. La respuesta a los mismos se ha visto dificultada por la resistencia a aceptar cambios y errores de diagnóstico que han favorecido

la valoración negativa del funcionamiento de las instituciones públicas. La caída del PIB y del empleo en España se ha acentuado porque mientras los efectos contractivos del ajuste fiscal son inmediatos y han resultado agravados por la intensidad de la consolidación acordada en la UE los previsibles efectos de las reformas estructurales se producirán a medio plazo. La destrucción de empleo ha sido el mecanismo predominante para ajustar la caída de la demanda de trabajo, con efectos claros sobre otras variables como el consumo, el ahorro, la inversión y los ingresos y gastos públicos, y ha impulsado la productividad por un camino poco deseable.

En el periodo más reciente la reducción de la oferta de trabajo está limitando el crecimiento del desempleo.

La balanza exterior presenta un buen comportamiento, con una mejora clara de las exportaciones y una contención de las importaciones como consecuencia de la atonía de la demanda interna y la recuperación de la competitividad precio de los productos españoles.

La preocupante atonía de la producción e intensa destrucción de empleo obligan a reconsiderar los riesgos de una estrategia de ajuste rápido. El sector público ha conseguido reducir su déficit, pero los incrementos en los impuestos directos e indirectos y los ajustes de gasto en todas las administraciones han contribuido de manera negativa a la evolución de la demanda interna. El elevado déficit público y el volumen de endeudamiento exigen importantes esfuerzos para reducir los desequilibrios.

La inversión se ha visto debilitada por la baja utilización de la capacidad productiva instalada y por la reducción de los precios de los bienes y activos, con la excepción de los relacionados con las TIC que han permitido que el capital productivo haya seguido creciendo durante la crisis. En la actualidad la estructura de fuentes del crecimiento se caracteriza por una contribución negativa del trabajo, mucho menor del capital y prácticamente nula de la PTF. A las empresas les resulta más sencillo ajustar el factor trabajo que el capital físico instalado.

El vigor de la recuperación dependerá del impulso que pueda dar el sector exterior y el crédito, de la velocidad de los cambios estructurales puestos en marcha y de la recuperación de la confianza individual y colectiva, gravemente mermada tras un periodo tan largo de recesión. La economía española, dotada de recursos materiales y humanos suficientes para crecer, parece desde hace más de cinco años su peor crisis desde la Guerra Civil. La recuperación requiere que se produzca una mejora generalizada en su entorno económico natural, la Unión Europea (UE), y que las grandes locomotoras europeas aceleren su ritmo. Ese será el momento de que España vuelva a crecer pero, mientras tanto, debe continuar la corrección de sus principales desequilibrios externos e internos, una tarea en la que se han producido algunos avances. Si España no crece no es porque carezca de recursos de capital físico sino porque, habiendo perdido el impulso de sus motores tradicionales, no los ha podido reemplazar en estos cinco años con nuevos proyectos empresariales mejor alineados con la evolución de los mercados.

A corto plazo es difícil aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen los mercados nacionales e internacionales, al tiempo que se asimilan los efectos devastadores de la crisis. Como consecuencia del desplome de la actividad, en España sobran oficinas, naves, suelo industrial, capacidad en las infraestructuras públicas de todo tipo, o incluso plantas, maquinaria y equipos que se encuentran muy infrautilizados. Además, a la vista de las abultadas cifras de desempleo, tampoco escasea el capital humano en el que se viene invirtiendo durante muchos años y que se encuentra abundantemente disponible a la espera de una oportunidad de empleo, sea asalariado o a través de la puesta en marcha de una iniciativa propia. En resumen, en comparación con los países desarrollados España no destaca por sus tasas de empleo ni por sus dotaciones de capital por habitante, y el capital acumulado con intensidad en las últimas décadas no es aprovechado tan productivamente como en otras economías, a pesar de que las dotaciones de capital por ocupado son similares.

Visto con perspectiva de futuro, no parece probable que los elevados ritmos de acumulación de los últimos años vayan a volver fácilmente a la economía española por tres razones: existe un exceso de capacidad instalada que requerirá importantes avances de la demanda para ser absorbida y mantendrá la productividad del capital en niveles bajos durante cierto tiempo; parte de ese capital que ahora no es rentable ha sido financiado con deuda y no abunda el crédito para nuevos proyectos; y tampoco abundan los proyectos rentables en número y calidad suficiente para superar la actual atonía inversora. La acumulación del pasado actúa en estos momentos como freno de la acumulación futura y es muy importante saber en qué otros activos se puede apoyar un patrón de crecimiento diferente. El capital humano como recurso productivo contempla no solo el número de personas que conforman la fuerza de trabajo sino también su capacidad de generar rentas. Nuestras mayores debilidades se encuentran en el reducido peso que tiene la I+D y los gastos destinados a la mejora del funcionamiento interno de las



empresas, incluida la formación de los trabajadores en el puesto de trabajo. El elevado grado de temporalidad que padecemos junto con otros condicionantes, como la muy reducida dimensión de muchas empresas, la insuficiente formación de sus responsables y el escaso uso de modelos de gestión avanzados son seguramente determinantes de la menor inversión en esos intangibles. La comparación internacional ha permitido constatar que los países que están teniendo mejor comportamiento durante la crisis que padecemos son precisamente los que más invierten en estos activos, tanto en I+D como en la mejora del funcionamiento de sus organizaciones, habiendo reforzado mediante esas iniciativas su capacidad de respuesta a los problemas. El crecimiento español se ha ido apoyando secuencialmente en el avance del capital físico, el trabajo y la tecnología, factores que han ido creciendo no solo en cantidad sino también, y sobre todo, en calidad. También se ha podido constatar que los países que mejor han capeado la crisis habían realizado previamente importantes reformas liberalizadoras

o concentrado su esfuerzo inversor en distintos capitales intangibles, fundamentales para aprovechar su capacidad productiva, mejorar su eficiencia y dar respuesta a los cambios en el escenario competitivo, basando en ellos su capacidad de innovación y progreso en el próximo decenio. España ha llegado tarde al capital intangible, como lo hiciera antes con las TIC, las infraestructuras, la extensión de la educación o la acumulación inicial de capital, pero no por ello debería dejar pasar la oportunidad de subsanar esta debilidad. Si lo hace, habría llegado más tarde pero habría llegado y, como en otras ocasiones reduciría distancias con el resto de los países de su entorno. En la actualidad no falta capital físico sino capacidad de utilizarlo y pesa demasiado la deuda con la que se financió su inversión en la época del crédito barato. El actual reto es generar empleo productivo sin ocasionar pérdidas en las empresas privadas o déficit en las AA. PP. La mayoría de los países desarrollados han reconocido la importancia de los activos intangibles como fuente del crecimiento.

Pero España no se encuentra bien posicionada en este campo. Se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años, pero insuficiente para converger con los países que nos resultan más cercanos. Además, la composición de la inversión intangible no es la más adecuada desde la perspectiva del crecimiento. Nuestras mayores debilidades se encuentran en el reducido peso que tienen la I+D y los gastos destinados a la mejora del funcionamiento interno de las empresas, incluida la formación de los trabajadores en el puesto de trabajo. Los bajos niveles educativos de muchos trabajadores y empresarios y el elevado grado de temporalidad que padecemos es seguramente responsable de ello. Asentar una nueva etapa de crecimiento duradero sobre bases más competitivas requiere intensificar el uso del conocimiento y de los capitales intangibles para mejorar la productividad, tal y como ya se ha destacado en el capítulo anterior. El camino para conseguirlo pasa por cambios en la especialización de las empresas, el redimensionamiento de los sectores y una mayor internacionalización del tejido productivo.

El rasgo diferencial más importante del impacto de la crisis en España ha sido la masiva destrucción de empleo, por lo que en los últimos años el paro es la primera preocupación de la sociedad española. Los diagnósticos sobre las causas de ese grave problema subrayan con frecuencia la caída del nivel de actividad y otros factores relacionados con el volumen y características de la demanda de trabajo, pero también el deficiente funcionamiento de las instituciones laborales y diversos factores asociados a la oferta de trabajo y la limitada empleabilidad de una parte de los demandantes de empleo. Estas debilidades y desajustes tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones educativas, el tipo de formación recibida y las habilidades y competencias adquiridas en ellas, las decisiones de los jóvenes y las familias sobre los años de estudios cursados. Pero también están relacionados con la capacidad de emprender de la sociedad española, en particular de los jóvenes españoles más cualificados, y con la preparación de los emprendedores para crear y dirigir empresas en el escenario competitivo actual.

Pese a las múltiples reformas en ambos terrenos, los resultados siguen planteando interrogantes sobre la idoneidad del diseño y el funcionamiento del mercado de trabajo y del sistema educativo. Algunas de las preguntas más relevantes se refieren a las causas del elevado desempleo y la coexistencia, en algunos periodos de un paro elevado con un intenso crecimiento de los salarios.

Otras se refieren a la combinación de bajos resultados educativos, elevado abandono temprano de los estudios de muchos jóvenes y altas tasas de sobrecualificación entre los titulados con estudios superiores.

Estos problemas reflejan que en las relaciones laborales y las instituciones educativas españolas muy reguladas y en un alto porcentaje públicas falta flexibilidad para adaptarse a las necesidades de una economía y una sociedad rápidamente cambiantes.

La conciencia social acerca de esta necesidad no está generalizada y, en ocasiones, ni siquiera existe entre los responsables de instituciones que precisan esos cambios.

Esto hace que las demandas de flexibilidad se enfrenten a resistencias porque atenderlas implica revisar prácticas que son consideradas derechos adquiridos y vistas como garantías que protegen a parte de los trabajadores.

Este fuerte crecimiento del desempleo durante la crisis es considerado un reflejo directo del mecanismo de ajuste que predomina en el mercado de trabajo español: la cantidad de personas contratadas.

La rescisión de la relación laboral en especial la extinción de los abundantes contratos de trabajo temporales existentes es mucho más utilizada en España que en otros países europeos

En los primeros años de crisis, la adaptación a la menor demanda de empleo se concentró en España en los mecanismos ligados a la ocupación flexibilidad externa y apenas se utilizaron fórmulas como la reducción de salarios o la jornada de trabajo flexibilidad interna que permiten preservar la relación laboral y reducir menos el número de empleos. Existen, sin embargo, excepciones en esta dirección y deben ser subrayadas, sobre todo en el caso de los...

trabajadores más cualificados cuyo capital humano las empresas han tendido a conservar, existiendo en la actualidad más ocupados con estudios universitarios

Ahora bien, el desajuste creciente de la oferta y la demanda de cualificación en nuestro país no puede ser ignorado. Tampoco que los excesos de oferta son abundantes en ciertos tipos de titulaciones superiores pero mucho menos nada en otras, como sucede en algunas de formación profesional en las que las empresas que no encuentran candidatos en especialidades médicas que se cubren en buena medida con titulados extranjeros. En términos generales, mientras en la práctica totalidad de las economías europeas el porcentaje de trabajadores en ocupaciones altamente cualificadas, supera al porcentaje de trabajadores con estudios superiores universitarios y profesionales, España es una excepción a esa regla.

Esto sucede sobre todo por el bajo porcentaje de puestos de trabajo cualificados, mucho más que por existir un porcentaje particularmente elevado de titulados superiores.

Pero la crisis está modificando a su vez los comportamientos de trabajadores, empresas y familias en estos dos ámbitos. Por ejemplo, cuando se revisan los cambios recientes en el mercado de trabajo, las conductas observadas reflejan que la posición negociadora de los trabajadores se ha debilitado sensiblemente el riesgo de caer en el desempleo y que, paulatinamente, se toman en consideración alternativas que inicialmente eran rechazadas. Pero la debilidad de la demanda de trabajo en los últimos años ha ido abriendo paso poco a poco a otras respuestas que retrasan o reducen la entrada en el mercado laboral: prolongar los estudios, buscar empleo en otros lugares, abandonar el mercado de trabajo por desánimo, prejubilación o emigración o emprender una actividad autónoma . En este nuevo escenario, una proporción cada vez mayor de jóvenes decide continuar sus estudios, una opción mucho más atractiva ahora que la alternativa es el desempleo. Los datos más recientes referidos a España estiman que un 46,3% de los menores de 25 años se matriculará en la universidad en algún momento



a lo largo de su vida. Este crecimiento continuado de personas con estudios superiores reduce transitoriamente la población activa, pero la incrementa después al elevar las tasas de actividad y plantea el desafío de aprovechar productivamente el capital humano en ocupaciones ajustadas a su preparación, evitando el riesgo de sobrecualificación creciente, ya analizado.

Un tercer momento vital en el que se pueden adoptar decisiones que implican retrasar la entrada en el mercado de trabajo es al finalizar los estudios universitarios. La realización de un posgrado master, diplomas, certificados es la forma más frecuente de prolongación de la inactividad laboral y los datos disponibles indican que el recurso a esa práctica se ha intensificado mucho en los últimos años. El recurso a la formación puede buscarse en cualquier momento de la vida laboral, pues la formación continua es cada vez más necesaria para adaptarse a los cambios en las demandas de trabajo y los desajustes entre los perfiles de los trabajadores y los puestos se producen en momentos de crisis y también en los de expansión.

Este dato confirma la insuficiencia de las políticas activas de empleo desarrolladas en estos años pese a la gravedad del desempleo acumulado y la urgencia de un cambio de rumbo en este ámbito. Por otro lado, el potencial de nuestros cada vez más abundantes graduados universitarios ha de tener su contrapartida en el mercado de trabajo, mediante su aprovechamiento productivo.

Hay que promover la movilización de su capital humano y su capacidad de arrastre promoviendo el emprendimiento entre los titulados superiores como empresarios y como directivos. Su contribución a la renovación de la estructura de puestos de trabajo y de ocupaciones de nuestro tejido productivo es imprescindible.

En la salida de la crisis jugará un papel importante la activación emprendedora de los jóvenes mejor formados y la reducción de la brecha que separa todavía a buena parte de nuestras empresas del patrón de profesionalización y formación de los gestores que caracteriza a otras economías desarrolladas. Los efectos de la crisis y las reformas laborales realizadas ..

han empezado a modificar los comportamientos de los agentes y el funcionamiento de las instituciones laborales, pero de forma tardía y un tanto vacilante. Por una parte, los salarios muestran mayores dosis de moderación y, aunque las horas anuales per cápita por tipo de contrato se mantienen estables, aumenta la importancia del trabajo a tiempo parcial.

Por otra parte, la escasez de empleo ha terminado propiciando reducciones de la oferta de trabajo que pasan por la prolongación de los estudios, la emigración (sobre todo, pero no exclusivamente, en el caso de los extranjeros y jóvenes), y el emprendimiento de una actividad autónoma.

Las cifras de paro no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del problema y la insuficiencia de las respuestas al mismo, sobre todo en el caso de los parados menos cualificados. El escenario previsible para el resto de la década actual es de insuficiente creación de empleo y concentración del mismo en las ocupaciones que requieren más formación.

El paro seguirá siendo elevado, en especial para los escasamente cualificados, por lo que es necesario aprovechar con decisión el potencial flexibilizador del nuevo marco de regulación surgido de las últimas reformas del mercado de trabajo para facilitar en la medida de lo posible la creación de empleo. La formación tiene que ser el eje fundamental de unas renovadas políticas activas, que exploten las posibilidades abiertas por las nuevas iniciativas europeas respecto al paro juvenil y contrarresten los efectos de tantos años de alto abandono escolar temprano y las consecuencias de grandes bolsas de paro duradero de personas sin cualificación. Experiencias como la formación dual para parados es decir, el despliegue de segundas oportunidades de aprendizaje pueden ser de gran utilidad en ese terreno, si bien representan un gran reto para formadores y para empresas. La salida a la crisis actual pasará, entre otras cosas, por conseguir una mayor movilización emprendedora de nuestros jóvenes y la reducción de la brecha de profesionalización y formación de los gestores.

Los problemas siguen siendo graves y las incertidumbres elevadas, pero hay nuevos datos que pueden ser valorados como esperanzadores porque indican que progresa la corrección de algunos desequilibrios que condicionan el crecimiento.

La crisis actual forma parte de un proceso de transformación de la economía mundial, cuyos efectos se reflejan nítidamente en los obstáculos a los que se enfrenta la adaptación al mismo de España y Europa. Esta adaptación es insuficiente. Esta crisis forma parte de un proceso de transformación de la economía mundial de enormes dimensiones que está desplazando el centro de gravedad de la misma hacia el Este y el Sur y provoca desequilibrios en muchos países.

Pese a todo, el mundo creció vigorosamente en muchas de sus regiones en estos años, aunque las economías avanzadas han estado estancadas o en recesión en buena parte del periodo transcurrido desde 2007. España y Europa se están adaptando con dificultad a esas mutaciones y padecen los problemas con mayor gravedad.

La adaptación competitiva de las economías desarrolladas tiene múltiples consecuencias en el interior de los países,.En los países desarrollados puede ser necesario aceptar menores salarios, o mayores diferencias salariales entre el trabajo cualificado el más demandado y el no cualificado el más abundante .La consecuencia probable de estos cambios será una mayor desigualdad en las rentas salariales y en las oportunidades de empleo de distintos grupos de trabajadores en función de su nivel formativo , lo que plantea nuevos retos a los gobiernos, preocupados por evitar los riesgos de exclusión laboral y social.

Los desequilibrios acumulados en el interior de la UE en la fase de expansión previa responden tanto a los desajustes globales como a deficiencias específicas del proceso de integración europeo.Las carencias en la gobernanza de la UE y de la zona euro puestas de manifiesto en estos años han sido muy graves y condicionan la capacidad de enderezar una situación económica que, en muchos de los Estados miembros, sigue siendo preocupante.

España lleva décadas padeciendo tasas de desempleo elevadas durante largos periodos de tiempo. Las crecientes tasas de actividad de una población cada vez más formada y las fuertes corrientes migratorias no han sido asimiladas de manera permanente por la economía española. Las graves consecuencias del desempleo en estos años han inducido, lentamente, reacciones en la oferta de trabajo que son perceptibles en los indicadores más recientes: moderación salarial, prolongación de los estudios, retirada del mercado de trabajo y emigración. Sin embargo, la intensidad de esas respuestas es insuficiente para que este desequilibrio se corrija a un ritmo que evite el desempleo crónico de parte de la población. Dadas las circunstancias, resulta llamativa la debilidad de las políticas activas de empleo dirigidas a los desempleados más vulnerables.

Las implicaciones sociales asociadas a la enorme destrucción de empleo que ha tenido lugar en España han sido muy serias y su impacto intenso sobre la renta de las personas menos cualificadas y con menores ingresos

El empeoramiento del mercado de trabajo genera un avance en la desigualdad de la renta generada en el mercado y también de la renta disponible después de la intervención pública. Aunque la dispersión salarial no ha variado sustancialmente, algunos indicadores permiten vislumbrar un cambio de tendencia en 2011 que, de confirmarse, acentuaría la tendencia hacia una mayor desigualdad. Además, las prestaciones sociales por perceptor se han reducido pese a los esfuerzos por considerarlas prioritarias, lo que puede estar agravando la situación de algunos colectivos vulnerables a la pobreza. Resulta inquietante que puedan afectarles también cambios en los criterios de acceso a servicios públicos que son fundamentales para la igualdad de oportunidades. La crisis, junto con los desequilibrios domésticos e internacionales que están en el origen de la misma, está obligando a afrontar numerosos problemas difíciles, con urgencia y de manera simultánea. Las circunstancias desfavorables hacen más complicada su solución, generando círculos viciosos de desequilibrios



Un corolario de esta situación es que las expectativas económicas se han oscurecido para buena parte de los españoles, tras un quinquenio de estancamiento y desempleo creciente. muy grave de la confianza en la capacidad de las instituciones de responder a los problemas colectivos, que se ha visto acentuado por relevantes y abundantes casos de corrupción política.

La experiencia española de superación de dificultades en el último medio siglo ofrece argumentos para rebatir el pesimismo dominante, pero hay que reconocer que las circunstancias actuales son muy difíciles. Una actitud positiva frente a las mismas no debe negar que el camino a recorrer será largo y resultará particularmente complejo para aquellos grupos sociales con mayor riesgo de exclusión laboral en el futuro próximo. La dimensión de las actuales bolsas de desempleo y las perspectivas de crecimiento de la ocupación hacen previsible que tengan muchas dificultades para su inserción, máxime si no se plantean pronto políticas activas más ambiciosas en esta dirección.

## **España: retos a corto plazo**

El enderezamiento de la trayectoria española exige enfrentarse a retos de distinta naturaleza y gran calado, contemplando horizontes de corto y largo plazo. Entre los retos a corto plazo el primero, sin duda, es volver a crear empleo creciendo con suficiente intensidad. Para conseguirlo es urgente que vuelva a fluir el crédito, avanzar en la corrección del déficit público y mejorar las posiciones financieras de las empresas y familias. Todo ello deberá desembocar en una recuperación de la demanda interna que, junto con el impulso sostenido de la demanda exterior, mejore la utilización de la capacidad instalada hasta volver a impulsar la inversión. Mientras no haya una creación de empleo significativa a la que puede contribuir el aumento del empleo a tiempo parcial que se está produciendo es difícil recuperar el consumo, salvo lo que pueda derivarse de una paulatina mejora de la confianza por el final de la recesión.

Por tanto, dado que el ajuste del déficit público continuará aunque sea a menor velocidad, la demanda exterior seguirá siendo clave para sostener la recuperación en el futuro próximo. Las exportaciones, que por el momento se comportan muy bien, podrían recibir un estímulo de los mercados europeos que han salido de la recesión. Además, el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente ya permite reducir la dependencia financiera exterior y el endeudamiento, abaratando su coste. Por consiguiente, el reto es ir creando las condiciones favorables para la aceleración del crecimiento. El inicio en la reducción del desempleo podría acompañar a una escasa creación de empleo si continúa la caída de la población activa que se está produciendo. En cambio, el paro no se reduciría tan fácilmente si la mejora de las posibilidades de empleo favorece un repunte de la tasa de actividad. El mayor reto a corto plazo es volver a crear empleo porque es la vía ordinaria de acceso a la renta de la mayoría de las personas. Objetiva y subjetivamente, el empleo es clave para la inclusión social y la confianza

Un alto riesgo de caer en el desempleo y la elevada dificultad de salir de él reducen la renta esperada de las familias, deprimen la demanda de consumo y las expectativas de los inversores. Por estas razones, la recuperación de la demanda interna requiere un estímulo que solo puede proporcionar una abundante creación de empleo. Se trata de un objetivo que ha sido difícil de lograr en España excepto cuando la construcción ha actuado como motor del proceso, un elemento tractor con el que en esta ocasión no se puede contar y que solo puede ser sustituido por la captación de la abundante demanda exterior y el desarrollo de nuevas actividades. Sin poner fin a la intensa contracción del crédito es difícil que las decisiones de gasto de empresas y familias no resulten condicionadas a la baja, frenándose el consumo y la inversión. Un cambio de tendencia en el crédito bancario requiere la conclusión de la fase de saneamiento de las entidades, la restauración del acceso de los bancos a los mercados (condicionado por el ritmo de avance de la unión bancaria) y la mejora del clima de confianza en la recuperación.

Para ello, nada mejor que la prueba de resistencia que prepara el Banco de España anticipándose a los estrés tests que se realizarán a escala europea en 2014, antes de la puesta en marcha del mecanismo único de supervisión. Si el crecimiento se va confirmando, la recuperación de la confianza también avanzará y, probablemente, la componente subjetiva presente en las decisiones de financiación volverá poco a poco a valores positivos.

Mientras tanto, las medidas recientemente aprobadas para mejorar el acceso a la financiación de las empresas pueden paliar parcialmente los problemas, pero su importancia será limitada frente a lo que supondría la normalización del canal del crédito privado.

El establecimiento de objetivos de consolidación que no perjudiquen la recuperación es tan importante como el cumplimiento de los mismos. Es importante la recuperación del crecimiento del PIB y el pleno efecto de las medidas fiscales y de contención de gasto adoptadas por todas las administraciones tenga éxito

También el endeudamiento de empresas y familias se está reduciendo a pesar de la caída de la renta disponible, debido a la caída del consumo y la inversión y a la dificultad de obtener o renovar créditos. El reto es pasar de un desapalancamiento obligado por las circunstancias a otro favorecido por la mejora de la competitividad, el crecimiento de la renta y del ahorro ahora en niveles mínimos y la prudencia financiera. Una de las dimensiones más preocupantes del elevado apalancamiento ha sido la dependencia financiera del exterior y las consecuencias para España de un estrangulamiento de los mercados mayoristas internacionales. La condición para reducir esa dependencia paulatinamente es el superávit de la balanza por cuenta corriente. Continuar por esa senda es otro reto a corto plazo de la economía española, cuyo logro dependerá de que se mantenga el crecimiento de las exportaciones .

El último reto a corto plazo es reducir el enorme exceso de capacidad existente, sobre todo en activos inmobiliarios, tanto residenciales como no residenciales.

En el caso de los capitales inmobiliarios productivos, una parte de esa mayor utilización de la capacidad instalada habrá de derivarse del crecimiento de la demanda y la actividad, pero otra puede lograrse completando el proceso de abaratamiento de los precios de esos activos hoy improductivos, para hacerlos atractivos y rentables. Las caídas de precios de los activos han sido en muchos casos sustanciales seguramente es el ámbito en el que la devaluación interna ha avanzado más pero tiene que proseguir para facilitar que el esfuerzo inversor realizado en su momento tenga alguna utilidad más pronto. Es difícil establecer el ritmo óptimo de reconocimiento de las pérdidas en los balances asociadas a los errores cometidos al invertir, pero retrasarlo en exceso impidiendo que los precios bajen lo suficiente no las evitarán y, además, los capitales instalados permanecen sin generar servicios productivos y deteriorándose. Es conveniente valorar la importancia de vender paquetes de activos no utilizados al exterior como vía para reducir el elevado endeudamiento con el exterior

Numerosos desafíos a los que se enfrenta la economía española necesitan actuaciones duraderas de las que no cabe esperar resultados inmediatos.

Sin embargo, se trata de retos muy importantes para recuperar una trayectoria de crecimiento sostenido y mejorar nuestras condiciones de vida a medio plazo. Dado que los resultados van a tardar, los problemas deben ser abordados pronto y contemplados con un horizonte temporal adecuado. Para responder a esos retos hacen falta proyectos empresariales y empresarios capaces de movilizar los factores productivos y generar salarios y beneficios, y financiación adecuada. Para lograrlo es necesario apoyarse más en los activos basados en el conocimiento que permiten mejorar la gestión de la información, los recursos humanos y las organizaciones.

Es crucial tener presente que la fragmentación a escala nacional e internacional permite a muchas empresas especializarse en las tareas en las que son más productivas y promueve la interdependencia de las empresas y las economías.



Estas ventajas se asocian a la externalización y deslocalización de actividades mediante la externalización internacional o la inversión directa en el exterior y son más aprovechadas por las grandes empresas y en los sectores manufactureros. En cambio, las empresas que se abastecen solo en los mercados locales son menos productivas y muchas de las españolas se encuentran en esa situación. Numerosas empresas manufactureras que se enfrentan a la competencia internacional se resienten del coste que representa para sus aprovisionamientos la escasa intensidad de la competencia en los mercados interiores que les suministran inputs. En particular, los bajos niveles de productividad de algunos servicios a las empresas incrementan los costes de sus clientes, desincentivan la externalización de actividades y reducen la productividad. Aprovechar las oportunidades que ofrece a España la deslocalización es un reto relevante que debe ser contemplado para reducir los costes en tareas de bajo contenido en cualificación y centrarse en las más cualificadas, y convertirse en un país atractivo

Las experiencias de numerosas empresas multinacionales en distintos sectores confirman que en España es posible alcanzar niveles de productividad y competitividad elevados. Nuestro país sigue contando con ventajas de costes para ser un territorio atractivo a las inversiones extranjeras, en especial tras las caídas de precios de los últimos años y dada la abundante oferta de recursos actualmente existentes.

Por tanto, los procesos de deslocalización son también una oportunidad para atraer empresas, sobre todo las dedicadas a actividades de intensidad tecnológica para las que contamos con abundantes recursos cualificados y costes más bajos que en los países de nuestro entorno.

Nuestras dotaciones de infraestructuras y de mano de obra abundante de cualificación alta, y los salarios, costes del suelo y alojamiento inferiores a los de muchas economías europeas, deben servir como base para que determinadas actividades se localicen en España. Para alcanzar este objetivo es relevante el saneamiento financiero

El aprovechamiento del potencial de las empresas requiere mejorar el entorno para hacer negocios, profesionalizar la gestión y mejorar la adecuación de la oferta de capital humano a las necesidades productivas.

Pese a los avances conseguidos, buena parte de nuestro tejido productivo presenta carencias en el perfil formativo de empresarios y gerentes respecto a los estándares de otros países desarrollados.

Esto contribuye a que la capacidad de la economía española de generar ocupaciones cualificadas resulte insuficiente. recientemente aprobada Ley de emprendedores, en especial de los mejor formados. El reto para la productividad es que la tendencia positiva de los últimos años continúe mientras la economía crece, crea empleo y cambia su composición hacia el uso más intenso y productivo del capital humano.

Para ello es necesario incrementar los puestos de trabajo correspondiente a las ocupaciones cualificadas, que quienes los ocupan sean productivos y que las empresas gestionen los recursos adecuadamente.

Las previsiones europeas son que dos de cada tres puestos de trabajo creados en España sean cualificados, siendo necesario contar con recursos humanos adecuados en conocimientos, competencias y actitudes para cubrir una demanda cada vez mayor de capital humano y el desempeño de puestos en los que pueden ser productivos. La formación tiene que ser el complemento del cambio de especialización y estar adaptada a las necesidades de unas empresas mucho más basadas en el conocimiento. La formación dual es más relevante para la adquisición de capital humano específico en el seno de las empresas que usan intensamente el capital humano. Esa es la insistente reclamación de las empresas cuando piden cambios en el sistema educativo, en particular en la formación profesional superior, pero es un camino imposible de recorrer sin que el sistema educativo cambie y sin que las empresas reúnan las condiciones para participar en los procesos formativos.

## **Pobreza**

El aumento del número de personas y hogares en los extremos inferiores de la distribución de la renta en el último quinquenio incrementa el riesgo de pobreza.

El escaso acceso al empleo es clave en este sentido y, en su defecto, la labor compensatoria de las políticas públicas también. Si no se aborda la causa del problema la capacidad de generar empleo sus consecuencias pueden poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de protección social.

Así pues, responder al problema que representa el riesgo de pobreza pasa por recuperar el crecimiento y las oportunidades laborales de los menos cualificados.

Por consiguiente, el despliegue de políticas activas de empleo mucho más ambiciosas que las desarrolladas hasta ahora es fundamental también desde la perspectiva de la inclusión social. El 21,1 % de la población española vive por debajo del umbral de pobreza en 2012.

## **Igualdad de oportunidades**

Algunos servicios públicos, como la educación y la sanidad, son fundamentales para igualar las oportunidades de los ciudadanos en asuntos tan importantes como la formación y la salud y para moderar la desigualdad efectiva de la renta disponible ajustada, que incluye tanto las prestaciones sociales monetarias como las que se reciben en especie a través de los servicios públicos.

El acceso a estos servicios es particularmente importante para los grupos sociales con menor nivel de ingresos y más amenazados por el riesgo de pobreza. El papel del sector público es decisivo para garantizar la financiación de esos servicios en condiciones que favorezcan la equidad, pero buena parte del debate sobre los mismos se centra en discutir quién debe producirlos. Se trata de asuntos muy marcados por posiciones ideológicas, pero es imprescindible hacer esfuerzos por ir más allá. Los retos de cara al futuro para el logro de una financiación de los servicios públicos fundamentales que promueva la igualdad de oportunidades en España son tres: la sostenibilidad financiera del gasto público a medio y largo plazo, amenazada por la tendencia expansiva de los gastos asociados al envejecimiento

La existencia de grandes diferencias de recursos por habitante entre las comunidades autónomas, responsables de la prestación de estos servicios; y la falta de instrumentos de evaluación sistemática de los resultados de las políticas educativas y sanitarias, que promueva la difusión de buenas prácticas.

Las dificultades financieras de los gobiernos hacen evidente la importancia de prestar los servicios públicos de manera eficiente, minimizando costes y maximizando el volumen y calidad de los mismos. Sin embargo, las urgencias de los ajustes presupuestarios hacen que muchas reformas no tengan hojas de ruta claras para mejorar la eficiencia. Los retos en este terreno son importantes, pues el sector público se enfrenta a un horizonte restrictivo duradero y si no logra mejorar su eficiencia lo sufrirán los ciudadanos. La solución de los problemas que la economía española padece requiere actuaciones con capacidad de corregir desajustes, impulsar mejoras y minimizar los costes de permanecer en la situación actual.

Las propuestas relacionadas con la mejora de la competitividad son imprescindibles para que el tejido productivo cambie su composición y ganen peso las empresas y actividades intensivas en conocimiento, capaces de ganar batallas en los mercados internacionales como ya hacen las mejores compañías españolas.

El papel de los activos que permiten a las empresas gestionar eficientemente sus recursos físicos y humanos es crucial para mejorar la eficiencia en la compleja sofisticada economía actual. España necesita extender sustancialmente por todo su tejido productivo el uso intensivo de la información digitalizada, la I+D, el diseño de nuevos productos, la investigación de mercados y la formación en la empresa, así como realizar un esfuerzo por mejorar la frágil estructura organizativa de muchas compañías.

Las empresas españolas que poseen ya mayores fortalezas en estos activos están teniendo más capacidad de respuesta a las exigencias de los mercados y a los sobresaltos de la crisis.



El retraso de nuestro país en este terreno repercute en el predominio de visiones de corto plazo, el escaso uso de buena parte de las empresas de sistemas de gestión avanzados y el abuso de la intuición.

La escasa formación de quienes toman decisiones también representa un riesgo financiero, pues dificulta una valoración fundada de las rentabilidades esperables a medio plazo de los negocios.

Este riesgo es más elevado para aquellos empresarios autónomos que inician actividades y arriesgan sus ahorros sin un apoyo mínimo para realizar estos cálculos, siendo imprescindibles la concienciación acerca del problema y también las ofertas formativas para reducir los riesgos básicos que sean evitables.

Una actuación complementaria es la promoción del capital humano de mayor cualificación a los puestos de decisión de las empresas, mediante la contratación de titulados superiores como directivos, el fomento de las vocaciones empresariales y la formación de emprendedores entre los universitarios. .

Una parte importante del agravamiento de la crisis en España ha sido consecuencia de su insuficiente adaptación a los cambios en el escenario competitivo internacional. Las mejoras recientes en este sentido forzadas por la crisis han de proseguir en la recuperación, para que el sector exterior sea un motor permanente. Avanzar en esa línea permitirá aprovechar a fondo las ventajas asociadas a la fragmentación internacional de las cadenas de suministros.

La participación de las empresas españolas en ese terreno tiene que mejorar mediante el crecimiento del número de las que exportan y la difusión de la información sobre las ventajas que puede representar para competir la externalización internacional de actividades.

La expansión de estas actividades a un número de empresas mucho mayor requiere, una vez más, formación, pero también instrumentos financieros adecuados créditos, avales para abordar proyectos cuya maduración puede ser larga y apoyo eficaz de las agencias de comercio exterior.

Las actuaciones pasan por difundir las oportunidades entre los inversores, facilitar con complementos de formación la empleabilidad de los recursos humanos disponibles y abordar las reformas necesarias para crear un entorno favorable a las empresas. La demanda de conocimiento por las empresas ha de crecer por aumento del volumen de actividades de intensidad tecnológica media y alta y por la penetración del capital humano en el resto de actividades. España padece un doble desajuste: hay sobre-cualificación entre los titulados superiores y, a la vez, existe un porcentaje elevado de puestos directivos, técnicos y profesionales desempeñados por personas sin la titulación adecuada. El cambio de composición de las ocupaciones y la formación de quienes ocupan los puestos más cualificados debe retener talento y recuperar una parte del que sale al exterior y puede volver con experiencias muy valiosas. La competitividad en una economía tan cambiante como la actual requiere mayor capacidad de adaptación y elevada flexibilidad tecnológica de las empresas, de sus organizaciones

y empleados.

La flexibilidad interna contribuye a la supervivencia de la empresa, pero buena parte del tejido productivo y de los trabajadores no creen en ella, ni están educados para apreciar sus ventajas. Sin embargo, entre otras empresas y entre otros colectivos de trabajadores la flexibilidad es una realidad desde hace años en España, con frecuencia con buenos resultados en términos de empleo salarios y productividad, que no son suficientemente difundidos como ejemplos de buenas prácticas.

España y los agentes sociales necesitan hacer una apuesta leal por la flexiseguridad, es decir, por una flexibilidad acompañada de información y garantías de seguridad para los trabajadores, que evite que se cuestionen las adaptaciones necesarias para evitar la destrucción de puestos de trabajo.

El desarrollo de la reforma laboral en esa dirección es una cuestión de cultura entre los empresarios, los trabajadores, los asesores, los jueces y aplicación de la regulación, más que de la letra de la misma.

## **Prioridades en el gasto público**

Un horizonte de estabilidad presupuestaria reduce el riesgo de que los desequilibrios financieros permanentes del sector público sean insostenibles y contribuyan a frenar el crecimiento.

Pero ese enfoque aportará más a la competitividad si va acompañado de una priorización de gastos adecuada.

Desde esta perspectiva se necesita contemplar con atención el volumen y la eficacia de la inversión en capital humano, la inversión en infraestructuras y la inversión en intangibles.

En estos ámbitos el sector público no ha sido capaz de preservar la regularidad del esfuerzo inversor al contrario, en los dos últimos casos los ajustes han sido de una gran intensidad pero es necesario trabajar con horizontes de largo plazo y dotarse de instrumentos que sirvan para definir políticas de Estado a medio plazo, protegiéndolas del ciclo económico y del ciclo político. El buen gobierno de los asuntos públicos es condición necesaria para mejorar de la competitividad

La mejora de la competitividad española requiere medidas que pueden tener efectos no siempre positivos sobre las oportunidades de grupos sociales con bajos recursos, debido a varias causas: a que sus ventajas competitivas en los mercados de factores son menores en la actualidad; a la importancia de fomentar el uso de recursos educativos, que estos grupos poseen en menor medida; y a las implicaciones que la estabilidad presupuestaria puede tener sobre los gastos sociales.

Es peligroso ignorar los riesgos que representa para el desarrollo a largo plazo no lograr un crecimiento incluyente, es decir, de cuyos frutos participe toda la población.

Por esa razón, la agenda de las políticas a favor de la competitividad debe ir acompañada de actuaciones explícitas en el terreno de la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Políticas activas de empleo y desarrollar actuaciones adecuadas, por su orientación e intensidad, para mejorar la empleabilidad de los parados menos cualificados jóvenes o adultos es imprescindible para reducir la gran bolsa de desempleados

de larga duración que probablemente existirá a lo largo de toda esta década. Con acciones especiales de formación y fomento del empleo estos colectivos estarán probablemente condenados a la exclusión laboral, la dependencia de los subsidios públicos o la asistencia social privada. Esas circunstancias los mantendrán al otro lado de la frontera de las oportunidades de progreso. Como el volumen de personas potencialmente afectadas por esa situación es grande se necesitan actuaciones de envergadura en varias direcciones: formación para el empleo, información de oportunidades, mejora de la gestión de la intermediación, fomento del trabajo a tiempo parcial. En ausencia de ellas irá asentándose la idea de que esos colectivos son abandonados a su suerte mientras se pone el acento en la importancia de un nuevo modelo productivo en el que no participarán. La invitación a que las personas tomen la iniciativa de emprender sus propias actividades es positiva, pero si no va acompañada de apoyo formativo corre el riesgo de promover muchos proyectos inviables a medio plazo.

La magnitud de las acciones a desarrollar para mejorar la empleabilidad de los parados excede a los servicios de empleo y justifica implicar en ellas a toda la sociedad, transmitiendo la cultura de que quienes no tuvieron o no aprovecharon sus oportunidades en el pasado deben disponer de segundas opciones para evitar la exclusión laboral. Buena parte de la sociedad española valora ya la formación, de modo que el esfuerzo debe dirigirse a facilitar que el resto la parte que más lo necesita participe de iniciativas para no quedar al margen, consistentes en esas segundas oportunidades. Se necesitan actuaciones que movilicen los recursos del sistema educativo reglado y no reglado, de las empresas y de los medios de comunicación públicos.

Las nuevas habilidades y competencias requeridas a los ciudadanos del siglo XXI

La nueva sociedad demanda a individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes, autónomos, emprendedores, con altos dotes sociales que se adapten fácilmente a los ambientes laborales.



Los ciudadanos han de ser formados basándose en la autonomía y la flexibilidad, en la transmisión de actitudes reflexivas en una sociedad protagonizada por la incertidumbre y los constantes cambios.

Los docentes deben adaptarse a un mundo cambiante y deben formar a sus discentes sin saber qué les deparará el mañana, pero ofreciéndoles los recursos necesarios para que estos puedan adaptarse a una sociedad versátil, sociedad que exige aprender a aprender y a desaprender.

En el ámbito de la educación y las TIC se considera trascendental el establecimiento de políticas públicas regionales para el desarrollo sostenible en el que uno de los pilares sea la inclusión social.

“Los entornos digitales significan cambio, eficiencia, rapidez y no hay discusión sobre eso, pero en la mayoría de los casos estos nuevos entornos se han convertido en un nuevo escenario de exclusión social, especialmente para las personas con discapacidad y particularmente para las personas con discapacidad intelectual.

Un sistema educativo abierto a la comunidad y basado en aprendizajes colaborativos que implican a toda la sociedad. La labor de este sistema no es formar a ciudadanos sólo para ser útiles a un mercado sino formar a ciudadanos capaces de desenvolverse en todos los niveles sociales. Para ello los programas de formación docente deben dedicar una mayor atención a las competencias emocionales, serán ellos quienes dinamicen a los demás agentes con la finalidad de educar de forma integral. Lo que sí tendrá que hacer la sociedad, es diseñar cómo quiere que sea la educación del siglo XXI, la tecnología que acompañará será la que esté disponible llegado el momento de la implantación. La adaptación de un sistema educativo al mercado laboral debe evitar centrarse solo en los aspectos de mercado orientados a generar riqueza material. La sociedad del siglo XXI requiere un nuevo ciudadano que posea nuevas competencias. El nuevo perfil debe responder a un sujeto proactivo, creativo, innovador, reflexivo, crítico, capaz de resolver problemas de diversa índole, flexible, adaptado y todo ello

acompañado por unas competencias socio-emocionales que forjarán una personalidad sólida y capaz de hacer frente a las dificultades sociales que se presenten a lo largo de su desarrollo como persona.

### **La Universidad ante sus propios retos**

Una de las cosas ciertas que se puede decir de la actual crisis económica en España es que no es tanto la crisis pasajera de un modelo como su final irremisible. La opinión en este punto es prácticamente unánime: tenemos que dar paso a un nuevo perfil productivo basado en el conocimiento que garantice la competitividad de nuestro sistema y, con ello, el desarrollo de nuestros valores de cohesión social y territorial. Es un enorme desafío, del que una Universidad socialmente comprometida no puede quedar al margen. La Universidad española está capacitada y dispuesta a jugar un papel clave como motor de esa transformación y como elemento estratégico para mejorar. No se trata de inventar nada nuevo. Este es el camino que están siguiendo los países más avanzados y que están saliendo de la crisis con mayor pujanza.

En este contexto, las universidades refuerzan la dimensión de utilidad o función social, intentando dar respuesta a dos retos principales: facilitar el acceso de la población a una educación superior de calidad y apoyar al tejido socioeconómico para afrontar las nuevas reglas de competitividad internacional derivadas de la globalización. La Sociedad del Conocimiento necesita ciudadanos con un alto nivel formativo e instituciones capaces de generar saber y transferirlo a la sociedad eficazmente. Entonces, las preguntas son: ¿Cuál es la respuesta de la universidad? ¿Es suficiente? ¿Puede hacerlo sola? ¿Cómo hacerlo mejor?. Para contestar a estas cuestiones, debemos analizar la función educativa, la función investigadora y el problema de la innovación productiva, teniendo en cuenta las líneas de trabajo de alta responsabilidad que aparecen en el horizonte universitario en el futuro inmediato. Por lo que se refiere a la función educativa, la formación universitaria española ha alcanzado en las últimas dos décadas tasas de matriculación y graduación equivalentes a las de los países más desarrollados

Este dato es importante si se tiene en cuenta que, en el último año, se han recortado en torno a 300 millones de euros, un 5% menos, en un contexto en el que sólo se invierte en torno al 1,1% del PIB, mientras la media de la OCDE es del 1,5%. A pesar de todo ello, la universidad española ha puesto en marcha el reto del Espacio Europeo de Educación Superior, cumpliendo su compromiso como país en Europa. En el ámbito de la investigación, la producción científica española es la novena mayor del mundo. España genera el 3,4% de la producción global.

Dos tercios de esta producción científica es generada en las universidades. Es un resultado más que notable si consideramos que España sólo invierte en I+D+i un 1,38% de su PIB, muy lejos del 2,3%, que es la media de la OCDE. Ello revela una eficiencia extraordinaria: con poco, hacemos mucho. Con estos resultados el Sistema Universitario Español se sitúa entre los cuatro más productivos en ciencia. Y nos indica que disponemos de la materia prima básica para afrontar los retos, el talento.

Con este potencial humano cabe esperar que si se aumentara la inversión, se traduciría en un importante salto adelante que ubicaría claramente a España entre los países líderes en la escena internacional.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no se trata sólo de producir investigación, sino además de innovar, es decir, de transferir los resultados al tejido socioeconómico para hacerlo más competitivo. Aquí tenemos un evidente talón de Aquiles: siendo la novena potencia científica, España apenas alcanza el puesto 42 en el ranking mundial de competitividad. El reto de la innovación exige esencialmente la inversión de las empresas en I+D+i y la potenciación de modelos de transferencia del conocimiento que sean más ágiles y flexibles y permitan la colaboración de todos los actores, es decir, mejorar la cultura innovadora. Por tanto, es crucial no sólo mantener o incrementar la inversión en investigación globalmente, sino en especial aumentar la participación privada en la misma y mejorar los sistemas de transferencia de conocimiento para potenciar la innovación y así...

ganar competitividad y asegurar el empleo cualificado y el bienestar social. Esta apuesta debe ser estratégica y socialmente prioritaria. Hay un dato incuestionable: sólo aquellos países que invierten al menos el 1,7% de su PIB en I+D+i muestran índices de competitividad adecuados para afrontar el reto del crecimiento económico y la creación de empleo.

Como sociedad debemos ponernos como horizonte de referencia la Estrategia Europa 2020, que en el ámbito de la UE plantea un crecimiento inteligente e integrador reducir el abandono escolar a una tasa inferior al 10%, lograr que el 40% de los jóvenes tengan estudios superiores completos e invertir en I+D. Para alcanzar este horizonte, la superación del reto que supone un nuevo modelo social y económico que ha de fundarse en la confianza mutua entre todos los agentes, alejada de manifestaciones catastrofistas, la colaboración estrecha en el marco de una sociedad integral, donde todos aportemos nuestra contribución a un empeño colectivo, que es asegurar un porvenir sólido para nuestro país.

Nuestras Universidades deben mejorar en varios conceptos. A diferencia de lo que ocurre en EE. UU., en Europa, y sobre todo en España, la universidad es invisible para la sociedad. Parece como si fuera una institución aletargada que de vez en cuando pide dinero y ya está. Existe poco reconocimiento social a la aportación de la institución universitaria al desarrollo de un país. Y si la sociedad no se identifica con la universidad, no la apoyará. La inversión pública que recibe la universidad española es demasiado escasa.

El fomento de las relaciones entre la universidad y la sociedad debería ser prioritario. A la sociedad le debería preocupar lo que sucede en la universidad. En Estados Unidos se reconoce más que en Europa que la aportación que la universidad hace a la sociedad es enorme. Se debería realizar un estudio sobre el impacto de las universidades en su entorno y establecer clasificaciones de las universidades españolas en función de distintos parámetros. Las universidades deben gozar de mayor autonomía y liberarse de la tutela del Estado.



El papel interventor asumido por el Estado en España y en gran parte de Europa es una de las mayores lacras que sufre el sistema. La presencia del ministerio es constante, y existe un sobredimensionamiento de la legislación. La cultura universitaria es muy proclive a regular de forma exhaustiva todo lo que no haya legislado la Administración. Las universidades se deben diferenciar con respecto a las demás para ofrecer al estudiante el valor añadido de su diferencia. Si todas están cortadas por el mismo patrón, difícilmente competirán. La diferenciación también debe producirse entre los centros de una misma universidad.

La universidad y sus miembros deben rendir cuentas ante la sociedad; deben ser evaluados. Es imprescindible que en la universidad española se produzca un cambio cultural y de mentalidad: la asunción de competencias debe tener siempre como contrapartida la exigencia de responsabilidades. La evaluación debe ser interna y externa. Se deberían desarrollar sistemas de acreditación independientes de todas las universidades españolas.

Un sistema rígido no funciona, y el funcionariado redundaría en la rigidez del sistema. Las universidades deberían tener capacidad para fijar una parte importante del salario - incentivos- de sus docentes y para contratar de forma ágil a profesores ajenos a la universidad, con los mismos derechos de quienes pertenecen ya a la plantilla. La desaparición del funcionariado tendría como consecuencia, a medio plazo, un cambio de concepción universitaria de mayor calado y pondría límites más claros a la enorme burocracia que acaban generando estas estructuras. La medida anterior tendría incidencia también en las prácticas endogámicas, aunque el profesor Salaburu advierte que la universidad no es ni más ni menos endogámica que otras empresas. Menciona tres tipos de endogamia: del profesorado, en la docencia de materias y en la selección de cargos. Menos regulación, más flexibilidad y evaluaciones más constantes son algunas de sus propuestas. La universidad debe tener fuentes de financiación más diversificadas. En estos momentos, sus ingresos provienen de las subvenciones gubernamentales

las matrículas y los contratos de investigación. Sólo las dos primeras, sobre las que la universidad no tiene capacidad de decisión, contribuyen a financiar el gasto corriente, aunque la tercera también lo hace a través de un porcentaje que la universidad imputa a gastos de funcionamiento. Salaburu propone que los precios de las matrículas (que considera poco equitativas porque todos los estudiantes pagan lo mismo) se revisen al alza, no sin antes haber establecido una política de becas, préstamos y ayudas más atrevida que en la actualidad. Apuesta, también, por explorar otras fuentes de ingresos, como donaciones de empresas o particulares, a cambio de que éstas tuvieran un 100% de desgravación fiscal. Los deportes podrían ser otra fuente de ingresos. Es necesario involucrar al estudiante en la vida universitaria. La propuesta es modificar la ley para que el estudiante pueda combinar trabajo y estudio de forma regular en el ámbito de las instituciones universitarias. la universidad española necesita introducir cambios importantes, aunque éstos deben hacerse poco a poco

También uno de los retos más urgentes para el futuro de la universidad española es la internacionalización. Algunos de los problemas de la universidad en España en relación con la internacionalización tienen que ver con las trabas y dificultades administrativas para la captación de estudiantes y profesores, así como la escasez de programas vinculados a estos objetivos. En algunas universidades se han asignado presupuestos específicos para captar profesores de excelencia internacionales, pero estas iniciativas han fracasado porque no se pudo asignar una retribución equiparable a las del mercado internacional y porque no se garantizaba una estabilidad laboral razonable.

Otro aspecto a tener en cuenta en relación con la internacionalización es que para incrementar la movilidad universitaria, resulta imprescindible abordar una política lingüística eficaz. En estos momentos el mundo se mueve básicamente con una lengua franca que es el inglés, hasta el punto de que en las universidades españolas el aprendizaje de este idioma debería ser una exigencia

Todos ellos suponen grandes desafíos para lograr situar a la universidad española como eje central en la transformación de la sociedad en términos de riqueza y prosperidad, pero también de derechos y libertades.

Respecto al sistema de gobierno, las universidades deben abordar un cambio sustancial en la toma de decisiones e incorporar modelos de gestión más profesionalizados y acordes con entidades que gestionan presupuestos elevados. Los numerosos órganos colegiados y unipersonales de decisión y control existentes en la universidad dificultan, burocratizan e incluso bloquean la gestión y administración de la universidad.

Es necesario un diálogo más fructífero entre universidad y empresa.. Ni la universidad destaca por su capacidad para comunicar, ni la empresa acude a la universidad en la medida deseable. Es preciso arbitrar medidas que faciliten la permeabilidad universidad-empresa desarrollando los mecanismos previstos en la Ley de la Ciencia, así como fomentando el reconocimiento de la creatividad y del espíritu emprendedor.

## **Los retos del sector turístico en España**

Evolucionar nuestro modelo tradicional de Sol y Playa, que hoy representa más del 70% el turismo en España pero que compite con nuevos destinos emergentes en el norte de África, con ofertas en sol y playa similares pero mejores precios, y que solo la inestabilidad actual de la Zona está permitiendo que mantengamos altas cuotas de mercado en este tipo de turismo, pero esta no es una situación que previsiblemente se mantenga en el tiempo. Es, por tanto, urgente un proceso de regeneración y puesta en valor de nuestros recursos para que sin renunciar, por supuesto, al modelo de Sol y Playa, sino apoyándonos sobre él, definamos productos de más valor añadido (no podemos competir en precio con destinos emergentes), lo que nos puede aportar, además, turistas de más calidad, que es lo que realmente nos interesa, y no la masificación turística con escaso impacto económico individual. El país tiene que volver a apostar colectivamente por el turismo, con máximo consenso entre administración central y autonómicas y, por supuesto, con los operadores del sector

La demanda, ha superado hace tiempo el modelo exclusivo de Sol y Playa, lo que hace imprescindible incorporar actividades complementarias o alternativas para segmentos concretos de clientes, como turismo cultural, deportivo, de salud, negocios, etc., con énfasis en la calidad y en ofertas conjuntas que potencien las sinergias y, por tanto, el valor de un destino.

Pese a que nuestro sector está muy internacionalizado, especialmente en grandes empresas, es necesario profundizar a nivel de PYMES, y es que, en realidad, el sector está muy atomizado, lo que hacen necesarios procesos de concentración o alianzas estratégicas que faciliten esa posibilidad de internacionalización, que la atomización actual, es insostenible.

Adaptación a los nuevos canales de comunicación, comercialización y transacción on line, vinculados al auge de internet y las redes sociales, cada vez más activos en la venta de paquetes turísticos, especialmente si los portales son de marcas reconocibles y acreditadas.

En este punto, cabe destacar que el 80% de las transacciones en touroperación son on line.

## **El móvil y las redes sociales, nuevos retos del sector turístico español.**

“Más del 65% de los viajes empiezan en una red social y acaban en una web de reservas”, la adaptación necesaria del sector turístico a las nuevas tecnologías, a todos los niveles, para continuar cumpliendo objetivos.

También es fundamental que las empresas turísticas tienen que invertir en nuevas tecnologías. Nos tenemos que adaptar al cliente, mucho más formado, disperso e informado, más exigente”.

La importancia de evolucionar y potenciar el mundo del móvil, en aras de mejorar la conectividad del cliente y adaptarse a sus nuevos requisitos y exigencias es una cuestión irrenunciable para el sector. La innovación y las tecnologías en el área de las reservas, es un elemento fundamental a la hora de conseguir el éxito en el sector hotelero. El turismo emergente otro gran reto del sector, siendo su piedra angular el transporte aéreo, que debe “ofrecer muchos vuelos a precios baratos con buenas infraestructuras aéreas”, como mejor fórmula.



## **Empleo ‘verde’ en España**

En España la situación del empleo verde no es tan mal como en otros sectores laborales. El empleo verde es más sostenible, tanto en su concepto ambiental como en el cronológico, y se ha destruido menos en estos años de crisis que en otros sectores. A pesar de la situación que vivimos, se sigue generando empleo verde, si bien es verdad que a un ritmo menor y con más candidatos que nunca, por lo que es más difícil encontrar trabajo. El conjunto de las energías renovables supusieron el 31% del empleo verde identificado, destacando la demanda de energía eólica y fotovoltaica seguida de la solar térmica. Los sectores de la agricultura, y el de PRL, Calidad y Medio ambiente sumaron el 24% de las ofertas, gestión de aguas y de residuos representaron un 15% en conjunto y la consultoría ambiental alcanzó un 8%. En cuanto a nuevos nichos de empleo verde, la eficiencia energética ha representado un 7% del total. El 15% restante se repartió entre la sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, la educación ambiental y la gestión forestal

Aunque son porcentajes aún modestos pensamos que estas últimas áreas serán las que crezcan más en los próximos años, en especial la eficiencia energética, un sector que va a tener una importancia creciente en los próximos años por la rehabilitación energética de edificios el empleo verde seguirá siendo uno de los principales nichos de creación de empleo y aquel que de manera más sostenible nos puede sacar de la crisis, sin cometer errores anteriores que nos lleven de nuevo a la depresión económica y social. Creemos que puede ser el camino para lograr mayores cuotas de trabajo en el siglo XXI. Y más allá de la creación de este tipo de empleo, es necesario que la sostenibilidad no sea algo exclusivo de un sector sino algo transversal que afecte a todo tipo de empleos. Hace falta un cambio profundo en el mundo laboral, una transición hacia una economía verde. El cual debemos implicarnos todos: instituciones políticas y sociales, empresas y ciudadanos. Se trata de pensar de otra manera para que todos podamos vivir mejor y asegurando un futuro sostenible

## **El Sector agrario**

Se ha puesto de manifiesto la incompetencia de la Comisión Europea para resolver la grave situación de crisis permanente que padecen la agricultura y la ganadería europeas, agudizada más todavía por el fracaso de la actual Política Agraria Común reformada. Políticas que definitivamente están conduciendo a un callejón sin salida a la agricultura de pequeña escala, social y agroecológica, que se defiende bajo el paradigma de la Soberanía Alimentaria.

Esta situación es más dramática si cabe en España donde la crisis atraviesa todos los sectores estratégicos de producción, desde el vacuno de leche y carne, a los cereales, el arroz, y el ovino caprino pasando por el porcino, las frutas y hortalizas hasta los frutos secos, las almendras y las avellanas etc.

La evolución del paro agrario no afecta sólo a las personas que se dedican profesionalmente a la agricultura y la ganadería sino que tiene un impacto dramático en el conjunto de la economía del medio rural.

Nos encontramos pues ante un sector estratégico para la sociedad española y es necesario que el Gobierno adopte una serie de medidas que garanticen tal condición teniendo claro que, en un sector primario como el agrario, las inversiones y los apoyos públicos tienen un efecto multiplicador tanto en la actividad económica como en la generación de empleo.

En los últimos años los datos de evolución de la renta agraria total se han contraído que, sumado a otros factores, nos da una buena medida de la situación de grave crisis que atraviesa el sector agrícola en la actualidad .

La agricultura, debe de ser considerada como un sector estratégico, imprescindible también para una adecuada gestión y ordenación del territorio, la conservación del paisaje, el cuidado del medioambiente y la tarea más importante que la sociedad encomienda a sus agricultores y ganaderos: la producción de alimentos de calidad que deben ser la base de la alimentación. La agricultura y la alimentación han tenido que enfrentarse a numerosos cambios motivados por factores .....

como la globalización, la apertura de fronteras. la reformulación de diferentes políticas agrarias, las nuevas exigencias medioambientales, etc. El rápido incremento de los precios de las materias primas agrarias en los mercados, fomentado por la especulación, provocó un serio desequilibrio en el sector generando inestabilidad e incertidumbres.

La creciente liberalización del mercado mundial y la continua desregulación de los mercados agroalimentarios mediante la eliminación de mecanismos de control de la producción, como los aranceles o las políticas de precios públicos, están configurando un entorno en el que la agricultura familiar no puede resistir más y el abandono de la actividad agraria es cada vez más frecuente y acuciante. como la globalización, la apertura de fronteras. Además, estas políticas se ponen al servicio de un comercio de productos agroalimentarios especulativo que se está desarrollando sin ninguna transparencia, y con una preocupante concentración de poder en manos de las grandes multinacionales de la distribución agroalimentaria.

## **Retos del sector de la Energía**

Las redes energéticas inteligentes se sitúan en el epicentro de muchos de los cambios que se están produciendo en el sector energético –la sustitución de la infraestructura más obsoleta, la introducción de energías limpias, los vehículos eléctricos y muchos otros retos del sector–. Todos ellos ofrecen el potencial de reducir significativamente la ineficiencia de las redes energéticas, permitiendo una gestión de la demanda más interactiva, integrando mejor las fuentes de energía distribuidas con la red, cambiando la experiencia del cliente y facilitando nuevos usos de la energía. Las energías más limpias y las preocupaciones asociadas de regulación de las emisiones y eficiencia energética siguen siendo una de las principales prioridades para muchas de las compañías del sector en todo el mundo. Las empresas están realizando grandes cambios en el mix de combustibles, invirtiendo y desplegando fuentes de energía renovables y más limpias entre las que se incluyen la energía nuclear. Las operaciones corporativas son sin duda un motor importante para contribuir al .....

crecimiento de las empresas en el sector energético y una vía para adquirir la nueva capacidad, tecnología y habilidades que se necesitan para abordar cuestiones tales como la seguridad del suministro y la generación de fuentes más limpias de energía. Las operaciones corporativas son clave para aquellas empresas que quieren ampliar su presencia internacional y conseguir un adecuado equilibrio en sus carteras. El apetito de los inversores externos en el sector se mantiene con fuerza, y la influencia de los inversores internacionales chinos también es importante y crecerá en el futuro. En el sector energético, las exigencias de los proyectos de capital son inmensas. La inversión en infraestructuras de redes optimizadas y más inteligentes, en nuevas redes de transmisión para integrar fuentes de energía renovables, en mejores interconectores y en sustituir las infraestructuras más obsoletas son, todas ellas, preocupaciones acuciantes que sin embargo poco tienen que ver con realizar inversiones en nueva capacidad de generación de combustibles fósiles, de energías renovables o de energía nuclear.

En el entorno actual marcado por unos precios de la energía más elevados, la presión de los distintos grupos de interés sobre las compañías del sector energético para que aporten eficiencia y efectividad operativa es mayor que nunca. El aumento de los costes de producción, la presión que se ejerce sobre las líneas de suministro y la necesidad de invertir en una infraestructura cada vez mayor y más diversificada impone unos costes adicionales significativos a la cadena de valor. Las empresas deben prever que seguirá siendo difícil trasladar los costes a los usuarios finales por lo que la eficiencia interna y el rendimiento serán aún más vitales. Por otro lado, la gestión inteligente de los activos se torna cada vez más importante, especialmente en el contexto de los programas de inversión de capital en un momento en el que resulta necesario construir una gran cantidad de infraestructuras. Las actividades de las empresas energéticas se ven afectadas por una amplia gama de requisitos regulatorios. Además de los requisitos de información financiera, estas compañías deben responder a los objetivos ....



de política energética, a objetivos de emisiones y de cambio climático, a requisitos de precios y tarifas y a un amplio abanico de obligaciones de servicio mínimo. Además, cuestiones como la regulación de los datos y la seguridad son cada vez más importantes.

El sector energético es un sector maduro pero sigue evolucionando y experimentando cambios importantes en su dinámica de mercado. Caracterizado por los prolongados plazos de ejecución de sus proyectos y los grandes vaivenes de su ciclo de negocio, la actividad requiere una cuidadosa planificación estratégica y unos sólidos planteamientos a largo plazo para conseguir el éxito. Los consumidores demandan una mayor seguridad en el suministro energético. En las economías en desarrollo, la energía es sinónimo de crecimiento económico y a las empresas energéticas se les insta a que suministren combustibles limpios, fácilmente disponibles y a precios razonables. La escasez de mano de obra cualificada sigue siendo, en el caso de las empresas del sector energético, un auténtico desafío.

El mercado mundial de las energías renovables está creciendo de manera robusta y sostenida, todo el incremento se ha concentrado en la industria eólica, solar fotovoltaica y biocarburantes. España es el cuarto mercado mundial en energías renovables detrás de China, EE.UU. y Alemania, y ocupa un papel muy importante en energía eólica, fotovoltaica, solar termoeléctrica y bio-etanol. Sin duda la evolución de las energías renovables va a venir marcada en los próximos años por su globalización. En este escenario es muy importante que nuestra estrategia, tenga como objetivo prioritario que las principales empresas con una verdadera cartera de tecnologías propias (por favor, no más oportunistas), tecnólogos y científicos españoles en el ámbito de la energía puedan competir a nivel internacional. Tanto tecnologías renovables consideradas hoy maduras, caso de la eólica, como aquellas llamadas a experimentar un fuerte desarrollo a corto plazo, biomasa y solar, está previsto que alcancen más de un 50% de la reducción de costes a través del I+D en los próximos años. En todos los casos los retos..

tecnológicos a resolver se centran en la reducción de costes de producción y en el aumento de la fiabilidad y capacidad de adaptación a la demanda, con el fin de proporcionar una energía de más calidad. La energía eólica centra sus desafíos en la mejora de la predicción de viento, el desarrollo de grandes aerogeneradores, la implantación en terrenos complejos y ambientes extremos y en el desarrollo de la eólica distribuida con pequeños aerogeneradores. En biomasa se ha de impulsar el desarrollo de los cultivos energéticos, las tecnologías avanzadas de utilización térmica y termoquímica, y la producción de bioetanol y biodiesel a partir de variedades vegetales no convencionales y de bajo coste. La energía solar presenta un gran número de opciones tecnológicas con desarrollos a potenciar. En fotovoltaica es prioritario el aumento de la eficiencia, así como la reducción de material mediante el empleo de láminas delgadas o el uso de concentración solar. Y todavía nos queda el reto de incorporar este modelo de manera también masiva al sector del transporte y al calor de proceso industrial.

Además de los biocarburantes, la electricidad solar y los combustibles solares (combustibles sintéticos generados en procesos alimentados por energía solar), abren las puertas a sectores que hasta ahora han resultado impermeables a las tecnologías renovables.

Las energías renovables dan el salto cualitativo y cuantitativo para demostrar que pueden dar una respuesta al problema de facilitar un crecimiento global que al mismo tiempo se haga en un contexto energético sostenible y con concepciones de generación distribuida mucho más racionales. El desarrollo y la apuesta por las energías renovables se convierte en una necesidad imposible de eludir para conseguir un desarrollo sostenible en un mundo con creciente demanda de energía, porque ya hoy por hoy son un aporte importante dentro del plan energético, sin los impactos que supone para el medio ambiente la producción de energía a partir de los combustibles fósiles, que además cuentan con el problema añadido de la escasez. También, la producción de electricidad a partir de energías renovables genera más puestos de trabajo

que a través de las fuentes convencionales y la evolución de los precios es previsible ya que los costes no dependen de factores políticos internacionales ni del agotamiento de recursos la implantación y el desarrollo de las energías renovables es imprescindible para paliar el cambio climático y que su implantación tendrá futuro a largo plazo. Sólo hace falta un gran compromiso tanto por parte de los gobiernos, como de las empresas y de la ciudadanía en general. Pero la administración española ni el gobierno apuesta claramente por este tipo de energías limpias el Gobierno sigue con su estrategia de acoso y derribo al sector de las energías renovables. La publicación de los estándares retributivos materializa el durísimo recorte que se aplica a las diferentes tecnologías renovables y está en línea con las previsiones de la orden de peajes, que cifraba en 1.750 millones de euros el total del ajuste. Lo que en principio sería un ajuste de 1.350 millones para todo el régimen especial se ha incrementado hasta cuadrar, con los recortes a las renovables, el déficit de tarifa correspondiente a 2013, 2014 y años sucesivos.

Es incomprensible que el Gobierno se ensañe con un sector que aporta la mayor parte de la generación del sistema eléctrico y que es un negocio que en su conjunto es rentable para España . Pero la aplicación de esta normativa retroactiva quiebra la seguridad jurídica y al final, sea o no legal, es injusta porque no trata de forma equitativa a todos los actores del sector eléctrico. Pero la Comisión Europea no haya asumido la propuesta del Parlamento Europeo de alcanzar una cuota mínima de un 30% entre sus objetivos vinculantes para 2030 en materia de energía y medioambiente. La Comisión finalmente ha cedido a la presión de los lobbies energéticos y de algunos países europeos al situar el objetivo vinculante de renovables en un modesto 27%, obligatorio para la Unión Europea en su conjunto pero no para los estados miembros. Con esta decisión, sobre la más que discutible base de mejorar la competitividad de la industria europea, la Comisión da marcha atrás en su política de apoyo a un sector, el de las renovables, principal instrumento para reducir la dependencia energética.....

herramienta fundamental para dar cumplimiento a los compromisos de la Unión Europea en Cambio Climático, fuente de empleo y una baza importante para la recuperación económica de Europa. la decisión de la Comisión no es coherente con la estrategia seguida hasta ahora, pues según sus propios datos, marcarse un objetivo del 30% habría supuesto la creación de más 550.000 puestos de trabajo adicionales a la propuesta finalmente aprobada del 27% y pondría coto a la sangría de divisas que sufre Europa debido a la importación de combustibles fósiles al haber generado ahorros adicionales de 260.000 millones de euros.

Destacar que la balanza energética española en 2012 tuvo un saldo negativo de 45.500 millones de euros. Marcar un objetivo obligatorio a la propia Unión Europea y no a los Estados miembros en cuanto a la cuota de renovables es tanto como renunciar al desarrollo de las energías limpias y al liderazgo que Europa tiene en este sector, que además registra inversiones crecientes en todo el mundo.

La decisión de la Comisión supone tirar por la borda el ingente esfuerzo inversor llevado a cabo en Europa, tanto por el sector público como privado, y abandonar una posición de privilegio en el sector de las energías limpias, que es sostenible medioambiental y económicamente las Energías Renovables en España, demuestran con datos que las energías limpias son un gran negocio para España y también para Europa. El sector renovable registró en el citado año 114.000 empleos y con una aportación de 10.563 millones de euros representó el 1% del PIB español”, las renovables abarataron el precio del mercado eléctrico el año pasado en más de 4.000 millones de euros. Entre las conclusiones del Estudio cabe destacar que la aportación neta de las energías renovables (ahorro pool menos primas) al sistema eléctrico en los últimos ocho años ha sido de 5.639 millones de euros. Dos años después de que el Gobierno paralizara las energías renovables con una moratoria los problemas del sector eléctrico siguen ahí, el déficit aumenta y se sigue incrementando el precio de la luz a los consumidores



La situación, en España y en la zona euro, sigue siendo muy delicada, y cualquier tensión financiera, como las devaluaciones en algunas economías emergentes, amenaza con contagiarse. Con la Comisión Europea en punto muerto, el BCE vuelve a ser el vigía de la recuperación. Los presidentes de los principales bancos españoles han asegurado que las nuevas operaciones de crédito a empresas y familias aumentarán. “Hay un cambio de ciclo clarísimo”, sostuvo Emilio Botín, presidente del Santander, no sin antes asumir que “las secuelas de la crisis tardarán en desaparecer”. La reducción del desempleo y de la deuda apenas ha comenzado; otros indicadores de que la crisis sigue muy viva (la morosidad, los desahucios, el número de hogares sin ingresos) no dejan de crecer. La incógnita que se cierne sobre la recuperación española es hasta qué punto será capaz de generar empleo estable. Pero la cuestión más importante es que debemos aprovechar la crisis como una oportunidad para que la recuperación incipiente se consolide a medio plazo y para ello es necesario que todos recordemos en la misma dirección sin olvidarnos de las víctimas de una crisis que empieza a ver la luz al final del túnel. Pero del conjunto de la sociedad depende que logremos un futuro mejor para todos y lleno de esperanza.

*“En las cosas necesarias, unidad; en las dudosas, la libertad; y en todos, la caridad”. San Agustín.*

*“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”. Lyndon Johnson*

*“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”.  
Henry Ford.*